RADICALITZEM *la vida*

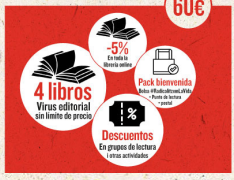
La majoria de llibres de Virus editorial es troben sota llicències lliures i per la seva lliure descàrrega. Però els projectes autogestionaris i alternatius, com Virus editorial, necessiten un important suport econòmic. En la mesura que oferim bona part del nostre treball pel comú, creiem important crear també formes de col·laboració en la sostenibilitat del projecte. Subscriu-t'hi!!

La mayoría de libros de Virus editorial se encuentran bajo licencias libres y para su libre descarga. Pero los proyectos autogestionarios y alternativos, como Virus editorial, necesitan de un importante apoyo económico. En la medida en que ofrecemos buena parte de nuestro trabajo para lo común, creemos importante crear también formas de colaboración en la sostenibilidad del proyecto. ¡Subscríbete!

Satèl·lit
sense quota

Càpsida

Replicant



https://www.viruseditorial.net/es/editorial/socios

folletos

Miquel Amorós

Post Babilonia

La condición metropolitana contra el derecho al territorio

VIRUS

LICENCIA CREATIVE COMMONS
AUTORÍA - NO DERIVADOS -
NO COMERCIAL 1.0

Esta licencia permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este texto, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Autoría-atribución: deberá respetarse la autoría del texto y de su traducción. Siempre habrá de constar la autoría del texto y/o la traducción.

No comercial: no puede utilizarse este trabajo con fines comerciales.

No derivados: no se puede alterar, transformar, modificar o reconstruir este texto.

Los términos de esta licencia deberán constar de una manera clara para cualquier uso o distribución del texto. Estas condiciones solo podrán alterarse con el permiso expreso del autor o la autora.

Este libro tiene una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial. Para consultar las condiciones de esta licencia puede visitarse: creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/ o enviar una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, EE. UU.

© 2022 del texto, Miquel Amorós

© 2022 de la presente edición, Virus Editorial

Título: Post Babilonia. La condición metropolitana contra el derecho al territorio

Diseño de colección: Pilar Sánchez Molina y Silvio García-Aguirre
Diseño de cubierta: Hèctor García Lorente

Edición y maquetación: Virus Editorial
Corrección de estilo y ortotipográfica: Carlos Marín Hernández

Primera edición: marzo de 2022

ISBN: 978-84-17870-13-3
Depósito legal:

VIRUS Editorial i Distribuïdora, SCCL
C/ Junta de Comerç, 18, baixos
08001 Barcelona
Tel. / Fax: 934 413 814
editorial@viruseditorial.net
www.viruseditorial.net

Índice

7 Introducción: La suburbanización del territorio
13 Post Babilonia. La neometrópolis desperdigada
27 Territorios en conflicto
29 Sobre la condición metropolitana en México
53 Cuando los bárbaros invadieron la periferia
67 Luna de miel en Mallorca
85 Neometrópolis, ciudad y derecho al territorio
87 Ordenación y defensa del territorio
109 El derecho al territorio
119 Anexo: Una nota sobre Patrick Geddes y el concepto de conurbación hoy

Introducción

La suburbanización del territorio

El actual proceso de suburbanización del territorio no es más que la otra cara de la expansión ilimitada de las metrópolis, resultado de un sistema fundado en el crecimiento económico infinito o, dicho de otra manera, en la acumulación ilimitada de capitales. La desaparición del mundo rural o el retroceso considerable de la naturaleza simplemente nos indica que la lógica de la mercancía se está adueñando completamente del territorio y, como antes pasó con la urbe, dicho territorio, en todos sus aspectos, está siendo sometido a los imperativos de la economía de forma sistemática y planificada. Cuando este adquiere las características de un suburbio, es decir, cuando orbita alrededor de la metrópolis —y depende absolutamente de ella—, significa que ya se ha convertido en un espacio propicio para la acumulación capitalista y, a partir de entonces, cualquier actividad

que no vaya orientada en ese sentido carece de valor y tenderá a ser obstruida o pervertida hasta volverse susceptible de tratamiento industrial y dar beneficios a sus explotadores privados.

Mientras la mundialización económica dirigida por el sector financiero abraza la totalidad de la actividad humana, el espacio tiende a su urbanización total. Los métodos y prácticas con que dicha actividad se lleva a cabo adquieren un carácter totalitario, no solamente en su aspecto concentracional, sino por el impulso autoritario y liberticida contenido en la actual fase tecnológica, agravado por el peso de las contradicciones que el sistema-mundo alberga y agudiza. En otro lugar nos hemos referido al urbanismo totalitario como culminación del desarrollismo urbano «táctico» típico de las antiguas políticas socialdemócratas. Entre tanto, la dominación —el sistema dominante— va salvando cualquier escollo, sigue reconfigurando los hábitats como no-lugares y continúa aniquilando progresivamente la parte de humanidad que pudiera subsistir escondida en islotes comunitarios o amparada en el conflicto contra las fuerzas de eso que llaman «los mercados».

Si el capitalismo globalizado está creando un mundo humanamente agobiante, al mismo tiempo crea a la gente capaz de disfrutar del agobio. Esto es verdad especialmente en los turistas. Los progresos de la alienación proporcionan a las masas urbanas viajeras la sensación de estar en todas partes, nunca

mejor dicho, como en su casa. Al remodelarse el territorio de acuerdo con las leyes de la mercancía, se reproducen espontáneamente en su seno los hábitos automovilistas, el consumismo desaforado y las conductas compulsivas metropolitanas. Las nuevas clases medias invaden los espacios suburbializados con la misma despreocupación que los nuevos emprendedores los acondicionan y ordenan jerárquicamente. La economía global ha alumbrado unas élites internacionales con alta capacidad de gasto, que toman el relevo de la burguesía, exigen su espacio exclusivo y marcan tendencia en el consumo «verde». Son el objetivo principal de los estrategas territoriales, que se afanan por captar recursos para atraerlas. Para ello disponen de dos instrumentos supuestamente infalibles: la sostenibilidad y la digitalización.

El denominado «desarrollo sostenible» es un eufemismo con el que nombrar la destrucción y abandono de terrenos cultivables, el vaciado brutal y la reconstrucción del territorio en función de intereses variables derivados de su explotación industrial. A menudo encubre actividades de esparcimiento perniciosas bautizadas como «turismo ecológico» o excursionismo «responsable», y complementadas con acondicionamiento paisajístico y medidas proteccionistas perfectamente integradas en el proceso destructivo. Asimismo se califican de sostenibles los productos de una agricultura «de proximidad», a veces con patente «agrobiológica», destinados al suministro de la burguesía ambientalista

que frecuenta y coloniza los campos. Finalmente, el colmo de la sostenibilidad económica se alcanza con las centrales eléctricas productoras de energía supuestamente «limpia». Tanto desarrollismo «alternativo» y tanta «reinvención» del territorio no son más que una apuesta por el capitalismo verde, totalmente compatible con el otro, el de siempre, con el que cohabita sin problema. El capitalismo de las autopistas y urbanizaciones, de la industria agroalimentaria y las grandes superficies, ávido consumidor de energía «fósil» es el mayoritario.

Los planes digitalizadores son bien sencillos: pretenden conectar el territorio con la metrópolis para que funcione como una parte de ella inundándolo con sensores y cámaras, y de paso, convertir al vecindario campestre en nativos digitales consumidores de información, con sus teléfonos móviles llenos de aplicaciones. En un «territorio inteligente», la supervivencia misma en el campo tendría que depender de la conectividad electrónica, puesto que una vez colmada la «brecha» tecnológica ya nadie puede escapar a la tecnología punta. En verdad, el «campo conectado» favorece sobre todo a la administración, puesto que facilita el cobro de tributos y multas, ayuda a gestionar los servicios públicos y elimina barreras al control territorial, ampliando los horizontes del trabajo policial. No obstante, la digitalización beneficia de carambola a los inversores, y más a los especulativos, al permitir los negocios en tiempo real

y afinar su rentabilidad. Lo que no resulta tan obvio es la participación «democrática» de la población, aunque la demagogia dirigente la enarbole con insistencia, porque en una sociedad con la clase dirigente deslocalizada, la decisión escapa más que nunca a los gobernados locales. En realidad los habitantes son más bien materia prima de la publicidad, la vigilancia y el control, ya que su trazabilidad y localización inmediata son un componente esencial de las actuales políticas de seguridad, como por otra parte la delación institucionalizada y la obediencia ciega a las órdenes de arriba. El *smart territory* es como un enorme supermercado con todos los atributos de la cárcel.

El sentimiento de pérdida que produce la contemplación de un territorio devastado y contaminado no es suficiente para impulsar la formación de una fuerza popular decidida a acabar con la devastación contaminante y reconstruir el territorio con criterios humanos. Tampoco lo fueron la crítica intelectual de la idea de progreso o el tibio reclamo de los partidarios de la soberanía alimentaria por el derecho a la alimentación «adecuada». Y nada cabe esperar de las políticas «públicas» populistas o de la «gobernanza» ejercida por las administraciones del desastre. Una conciencia de especie en peligro solamente puede originarse en el fragor de las luchas sociales radicales articuladas en torno a un programa mínimo: el de la demolición de las áreas metropolitanas y del desmantelamiento

de las finanzas mundiales. La salvación de la periferia depende de la disgregación del autoproclamado centro, tanto urbano como capitalista.

Miquel Amorós, 6 de enero de 2022

Post Babilonia

La neometrópolis desperdigada

Hasta el dominio completo del capitalismo, tanto la palabra *ciudad*, como las que la han precedido, *polis*, *civitas*, *concilium*, *burgs*, *commune*, *municipio*, etc., han significado una comunidad política autorganizada, con fronteras definidas y con capacidad administrativa, jurídica y defensiva propia. Aunque por lo común dicha entidad se había desarrollado en Europa a partir de asambleas vecinales lo bastante cohesionadas como para poder tomar decisiones colectivas, no era ciertamente un espacio absolutamente libre, sin conflictos ni desigualdades, pero las servidumbres que contenía y las diferencias estamentales que surgieron en su seno no le impedían gozar de un grado relativamente alto de autonomía y, por consiguiente, de libertad. La Revolución Industrial acarreó el dominio de la alta burguesía manufacturera y convirtió las ciudades en lugares de acumulación de capitales, centrados en la producción masiva, el gran comercio, las finanzas y

el trabajo asalariado. Las nuevas fuerzas del mercado, dueñas de la ciudad, desbordaron sus límites y sometieron al territorio que las circundaba, empobreciendo a su población, vaciándolo y convirtiéndolo en reserva de espacio urbano. La ciudad industrial, ensanchada y zonificada, fue realmente una anticiudad, ya que la dominación burguesa polarizó y degradó el espacio urbano, segregando y dejando pudrir los fragmentos destinados al albergue de los obreros, a las fábricas y a los vertederos, pero por encima de todo, anuló su identidad al poner fin a la ciudad como sistema institucional autónomo. La construcción de un Estado nacional eliminaba uno por uno todos los bienes, derechos, libertades y viejas usanzas comunitarias que la tradición de autonomía hubiera podido conservar. El autogobierno ciudadano, o lo que es lo mismo, la independencia de la sociedad civil, reposaba en un equilibrio de poderes externo e interno que el Estado burgués rompió definitivamente a su favor. El Estado se desarrolló como representación oficial total de la sociedad y sobre esa usurpación se operó la separación entre lo público —el ámbito del Estado y la política— y lo privado —la parcela de la economía—. El mercado del suelo dio lugar entonces a un urbanismo blando y móvil, que se derretía y fluía por el territorio, eliminando barreras consuetudinarias y unificando en una sola —conteniendo lo peor de ambas— dos realidades antaño no enfrentadas, la urbana y la rural.

El influjo del capitalismo descompuso la ciudad en pedazos y opuso un centro a la periferia, un núcleo al extrarradio, un casco antiguo al suburbio, un horizonte infinito a sus lindes. La contraposición dentro/fuera se volvió bastante relativa puesto que las invenciones tecnológicas propiciaron infraestructuras de todo tipo (hidráulicas, de transporte, energéticas, de evacuación) que posibilitaron la urbanización extensiva o difusa de todo el territorio circundante, o sea su suburbanización. A comienzos del siglo pasado la antigua ciudad compacta se había transformado en una aglomeración discontinua y azarosa a la que Patrick Geddes llamó «conurbación». El desarrollo de las infraestructuras, el uso del hormigón y el auge de la demanda popular de vivienda originaron una arquitectura para pobres (los bloques abiertos) ampliamente reproducida. La proliferación de barriadas residenciales en las afueras y enclaves chabolistas dio pie a un nuevo modelo de asentamiento urbano, mucho más fracturado, de límites porosos, reflejo del impacto cualitativamente mayor de lo económico en la geografía: la metrópolis. El nuevo espécimen no conservaba nada de la ciudad original, solo era un sucedáneo. Estaba condicionado más por el flujo de capitales y el tránsito de mercancías y personas que por la propiedad o la producción. En tanto que forma espacial materializada de la ideología dominante, se trataba de una conurbación a mayor nivel que se desligaba de la

industria (relegada a la periferia más alejada) para centrarse más en los servicios, el ocio y el consumo, creciendo a través de metástasis, fundiéndose con conurbaciones menores y absorbiendo zonas adyacentes gracias a la mejor conectividad que proporcionaban las circunvalaciones, las vías de acceso, los trenes regionales y las autopistas. El proceso de metropolitanización implacable del mundo quedó patente tras la Segunda Gran Guerra. La industrialización de la agricultura marcó el punto de no retorno de la decadencia campesina tradicional; la desvinculación del campo con la conurbación quedó definitivamente consagrada. Las ciudades pequeñas y los pueblos perdieron con los habitantes lo que les quedaba de autonomía, de identidad y de cultura propia. Toda la región orbitaba como un satélite alrededor de la metrópolis con la que formaba lo que los expertos llamaron un sistema urbano. La vida en la urbe se escindió en momentos discontinuos conectados principalmente por el vehículo privado. El distanciamiento entre el trabajo y el consumo, entre la vida cotidiana y el lugar dormitorio, entre el esparcimiento y el habitáculo se operaba sin dificultad gracias al automóvil. El coche era como un implante ortopédico del trabajador consumidor, un instrumento de trabajo obligado y un complemento necesario para consumir, en fin, un artilugio donde se pasaba buena parte del tiempo y por culpa del cual el espacio público urbano se convertía en espacio de

circulación a motor y aparcamiento. Sin embargo, el desajuste causado por los conflictivos contrastes de una manera de vivir supermercantilizada, objeto de tratamiento industrial, se asumía como un mal menor, un daño colateral, ya que la clase dirigente no tenía enfrente a las masas obreras indignadas que había derrotado, sino a clases medias adaptadas que la imitaban y a pobres desclasados, menesterosos e indiferentes que pugnaban por mantenerse a flote de la manera que fuese. El relativo éxito de la supervivencia industrializada en condiciones económicas estables bajo la tutela de un Estado keynesiano logró sin dificultad la aquiescencia de la mayor parte de la población metropolitana, poco dada a cuestionar aquello a lo que debía su seguridad y acaso su existencia.

Siendo los sistemas urbanos un fenómeno inestable en constante progresión, llegaría el momento de la crisis cuando la economía encallara en los escollos del Estado «del bienestar» y cediera la especie de contrato social sobre el que descansaba. Se inauguraría una fase neoliberal —una nueva forma de acumulación— en la que el Estado tendría que «adelgazar» y supeditarse enteramente a las exigencias del capital. En el ámbito espacial se produciría un proceso de reestructuración acelerada: las fuerzas centrífugas metropolitanas prevalecerían y obligarían a dar un salto cualitativo en la urbanización, es decir, en la fragmentación y la dispersión de lo

urbano. Así pues, con la mundialización de los mercados y el retroceso del intervencionismo estatal, emergió un nuevo prototipo de ocupación basado en la fusión de lo urbano y lo suburbano, o dicho de otra manera, en la confusión de las aglomeraciones con el entorno mercantilizado. El dominio absoluto de los flujos sobre los lugares determina una urbanización general: el turbocapitalismo define la nueva condición urbana. Los sociólogos han intentado nombrar el producto histórico de la última etapa de crecimiento urbano de distintas maneras: megalópolis, omnípolis, metápolis, posmetrópolis, ciudad difusa, telépolis, etc. Lo cierto es que la noción de desparrame total podría resumirlas todas. La reorganización económica que significó la globalización de los intercambios financieros y el comercio —posibilitada por el desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones— tuvo su correlato en la colonización total del territorio no urbano y en las grandes transformaciones internas que experimentaron las metrópolis-región. El proceso se hizo visible a partir de los años ochenta del siglo pasado cuando la remodelación del espacio operada por una metrópolis global, ahora un *hub* de la economía-mundo, alteró visiblemente la manera de consumir, moverse, distraerse y sobrevivir del vecindario urbano y agravó su impacto ambiental. Fin de un hábitat que fue específico de buena parte de la población mundial durante ochenta años o más, y advenimiento de

una aglomeración-empresa, simplificada, más insalubre, sin identidad clara, ajena al pasado, al tiempo y a la historia, es decir, descontextualizada, donde todo apareció como cortado por el mismo patrón, uniforme y espectacular, ya que si bien lo global penetraba en lo local, lo local, poniéndose en escena, se volvía global.

Varias son las características del nuevo orden urbano nacido de la dilatación continua de las coronas externas y la extensión constante de las ramificaciones radiales, fruto de la convergencia con la crisis metropolitana, el capital especulativo, la ideología posmoderna y la partitocracia. Indicaremos las principales:

Primero. Ausencia de límites. Y como consecuencia, no hay un dentro ni un fuera de la aglomeración; la oposición entre interior y exterior deja de tener sentido. El espacio urbano se vuelve homogéneo, flexible, trivial, intercambiable. Cada vez más se asemeja a un no-lugar, espacio neutro en el que los habitantes se sienten extraños y desubicados, ya que no pueden intervenir directamente ni son capaces de echar raíces en él. Propiamente no les pertenece, puesto que depende de la población flotante. No es de la gente que vive, sino de la gente que pasa: *commuters*, turistas y ejecutivos. En tal desordenado ordenamiento el interés público es subsidiario del privado.

Segundo. Desaparición del centro: no hay un centro que confrontar con una periferia. Los antiguos

núcleos ciudadanos desbordan sus contornos y se confunden con el extrarradio. Sus primitivas funciones se trasladan: todo es suburbio y centro a la vez. Las oficinas de los servicios estratégicos (inmobiliarios, financieros, aseguradores, jurídicos, publicitarios), los *clusters*, las terminales aeroportuarias, las estaciones intermodales, los centros comerciales y las grandes superficies definen una nueva centralidad dispersa, de forma que las nuevas referencias urbanas están por todas partes por más que al alma del lugar no se la encuentre por ningún lado.

Tercero. Aumento exponencial de la movilidad, y, por consiguiente, de la motorización popular, del despilfarro energético y de la contaminación. Un urbanismo de los flujos se configura con la proliferación de no-lugares transitados por motivos diversos, muy distinto al urbanismo de calles y plazas, pues no teje el espacio ni lo representa, sino que más bien lo agita y desancla: lo consume.

Cuarto. Polarización social extrema. El desclasamiento inducido por la penetración de la economía en la vida cotidiana ha sido responsable de la pérdida de conciencia de clase en la población explotada, a pesar de incrementarse asombrosamente el grado de desigualdad social. La sociedad de masas se reajusta verticalmente, estirando sus jerarquías y modificando la composición de las clases. Una clase dirigente transnacional —una élite desnacionalizada, global— descansa sobre unas

clases medias numerosas y estratificadas, dóciles y disciplinadas, alejadas de los guetos miserables donde sobrevive la población expulsada del mercado laboral, los trabajadores en precario, parados, marginados, sin papeles y sin techo. La vieja clase obrera ya no desempeña un rol central en la producción, demasiado automatizada, y su lugar oscila entre los escalones inferiores de las clases medias y el submundo de las masas relegadas y excluidas.

Quinto. Digitalización generalizada, y, en consecuencia, artificialización de la vida. La técnica, que ha sido siempre el gran auxiliar del capitalismo, se convierte ahora en la segunda naturaleza de la humanidad entera, la que define las nuevas condiciones de su «biotopo». Las tecnologías de la información y la comunicación están forzando una reorganización social de graves consecuencias en el terreno laboral, en el urbanismo y en la vida cotidiana. El régimen basado en el beneficio privado ya no es posible fuera de una sociedad de la vigilancia, la coacción y el chantaje, un mundo ultraconectado y monitorizado de teletrabajo, *smart homes* y *smart cities* donde el panóptico se ha hecho invisible al dispersarse en forma de cámaras, lectores de iris y sensores. Lo humano no es sino la prótesis de la máquina. Los múltiples estilos de vida virtual del ser humano ya son rediseñados online por la tecnociencia.

Al ser empresariales los criterios de gobierno urbano, la publicidad, o sea, lo espectacular, domina lo

funcional. El espacio urbano se va reduciendo a pura fachada, ya que la imagen promovida —la *marca*— es el impulsor ideológico de la transformación urbana. Orientada por las directrices del interés privado, la aglomeración posmoderna se aboca al exterior para atraer cuantas inversiones y turistas pueda. Ha de impresionar al visitante ignaro e impactar en los hombres de negocios con una imagen aparatosa. Por ello el equipo dirigente emprende, conjuntamente con la empresa privada y los gerifaltes políticos, operaciones de rentabilización del patrimonio cultural y monumental, creando un escenario rimbombante (museificación de centros históricos, promociones inmobiliarias exclusivas, calles comerciales horteras, conjuntos monumentales «de autor», edificios singulares, vacíos ajardinados) y festivalizando la vida ciudadana con eventos promocionales, performances, congresos de cualquier cosa y ferias comerciales. Así se configura con rapidez una marca sobre un espacio segmentado y frío, aséptico, transparente, repleto de fragmentos fingidos, paisajes simulados y arquitectura petulante como en un parque temático o un estudio cinematográfico. Se trata de un espacio-franquicia sin tensiones, disciplinado, profiláctico, inhumano, cuya sustancia es una mezcla de falsedad, voracidad y cursilería. Un decorado vulgar que prohíbe la liberación subyacente en la vida ciudadana, donde la servidumbre es voluntaria y el baile de la resignación cuenta con numeroso

público asiduo. El entorno ideal para los beneficiados con la mundialización.

El aislamiento social y espacial desprendido de un urbanismo ajustado a la necesidad de crecimiento de la economía se corresponde con el progreso de la digitalización, es decir, con el progreso mismo. No hacía falta una crisis sanitaria para empobrecer todavía más las relaciones sociales, pues el confinamiento en el domicilio privado ha sido la principal característica de la sociedad de consumo. Los útiles de separación y autorreclusión como el coche, la televisión y el ordenador en su día, o las tabletas y los teléfonos móviles hoy, desempeñan un papel importante en la destrucción de los vínculos afectivos y las costumbres societarias, por no hablar del que cumplen en la automatización de la conducta de las personas. La obtención de plusvalías prospera tanto gracias a la adaptación de la naturaleza humana a las exigencias tecnológicas y a la degradación medioambiental, como a la desaparición de la comunicación directa, las raíces vecinales y la sociabilidad comunal. Notemos que también los valores, hábitos y códigos de conducta de la cultura burguesa clásica, hegemónicos en la sociedad hasta la década de los ochenta del siglo pasado, han experimentado sensibles variaciones con la metropolitanización. El narcisismo y el exhibicionismo han desplazado a la preservación de la intimidad, a los modales o al civismo; un hedonismo superficial se ha vulgarizado con la masificación del ocio, los viajes

y el consumo; en fin, la inmersión en un ego neurótico, la adicción a la novedad y la fascinación por la imagen acabaron con el ideal doméstico, el compromiso y la mismísima identidad clasista. La sociedad de masas es hija de la sociedad de clases, pero más esteticista y mucho menos moralizante.

La lucha anticapitalista es innegablemente una lucha contracultural. Contemplemos sobrecogidos el estilo de vida metropolitano, fruto de la cultura bárbara vigente en el capitalismo tardío, y descubramos los aspectos que nos alejan del objetivo libertario para mejor combatirla, mientras dicha cultura no haya triunfado del todo. Demasiadas contradicciones la vuelven inviable y la conducen a la autoaniquilación. No tiene futuro. De todos modos, los contraproyectos de resistencia tendrán mucho terreno que sanear y liberar para que el urbanismo de la sumisión, el escapismo fiestero, la cultura de masas, la robotización y la neurosis se arruine irremisiblemente permitiendo así que un espacio de la libertad, de la autonomía y de la revuelta se abra camino. El hecho de que los revoltosos de hoy se preocupen por bosquejar un modelo de ciudad, de campo y de vida consecuentes contribuirá bastante más de lo que pueda pensarse a configurar un espacio y una cultura verdaderamente humanas.

Nautilus, *8 de marzo de 2021*

Territorios en conflicto

Sobre la condición metropolitana en México

Mi conferencia tratará de evocar el desarrollo de lo urbano como una especie de genealogía del desastre, con la intención de hacer visibles las grietas de la dominación que faciliten la revuelta vital contra el capitalismo mortífero. Desde hace algún tiempo, el debate sobre la expansión de las metrópolis y los males que ocasiona redunda en la conclusión de los antiguos críticos de las ciudades industriales, a saber, que el aire de la ciudad enferma. Sin embargo, nos permitimos objetar que a la metrópolis posmoderna no se la puede de ninguna manera llamar ciudad, pues se trata del hogar de la depredación financiera, un lugar estéril e insalubre, embrutecedor y superpoblado, desvinculado tanto de la historia de los trabajadores que la conformaron en parte, como del estilo de vida urbana de la burguesía originaria. Pero una enorme aglomeración amorfa disfuncional, sin objetivos «cívicos» ni más

fin que el de concentrar poder comporta la destrucción de los valores libertarios atribuibles a los proyectos colectivos de convivencia, y, por consiguiente, la pérdida total de la condición ciudadana.

«El aire de la ciudad te hará libre», decía un proverbio alemán que celebraba la libertad gozada por los vecinos de los burgos medievales. Murray Bookchin llegó a imaginar en esas asociaciones de labradores, artesanos y mercaderes llamadas ciudades «el florecimiento de la razón en la historia», y Lewis Mumford las consideró la creación cultural más grande de la humanidad. En efecto, a partir del siglo X la comuna europea, levantada a escala humana y organizada democráticamente, fue la cuna de la política y el hogar del pensamiento, la ciencia, la industria y el arte. Nacida en un contexto histórico concreto, era un tipo artificial de asociación con características particulares, contractual, dinámica, regulada por leyes y orientada hacia el progreso, muy diferente de la sociedad tribal, orgánica, estática, comunista, predominantemente rural, regulada por la tradición y apegada al mito. La población de la mayoría de ciudades-mercado en la Europa del siglo XVI oscilaba entre los dos mil y los cinco mil vecinos. Su recinto urbano, acotado por perímetros defensivos y edificado sobre una trama irregular de calles que desembocan en espacios abiertos o plazas, contrasta con la retícula uniforme subordinada al palacio o catedral barroca típica

del urbanismo colonial, y más todavía con el sentido geométrico y cósmico que emanan los monumentos ceremoniales de las ciudades amerindias. Los conquistadores españoles trajeron consigo, junto con la cuadrícula, una forma nueva de administración ciudadana, el municipio, cuando este ya no descansaba en la asamblea general y había perdido casi toda su independencia en provecho de un poder exterior encarnado por la autoridad real. Por eso mismo, los municipios de la Nueva España estuvieron lastrados desde el principio por las servidumbres del régimen colonial. No obstante, conforme la ley española, su funcionamiento se sustentaba sobre bienes «propios» que no podían enajenarse, aduanas interiores que gravaban el comercio y «arbitrios» cuyo empleo se hallaba estrictamente fijado. Por otra parte, la misma legislación establecía que los indígenas solamente podían acceder a la tierra en forma comunal. Se tuvieron en cuenta prácticas comunitarias anteriores a la colonización y el empleo vehicular de la lengua náhuatl. Así pues, en los municipios de «naturales» o en aquellos en cuyo gobierno participaban «indios» se mantuvieron las costumbres del calpulli —la célula básica de la aniquilada civilización azteca, autosuficiente y autogobernada (como el ayllu en el Perú incaico y el lof en el pueblo mapuche)—. Tal proceder encontró una sólida base en los llamados «bienes de comunidad» —que junto con los «propios» constituían por

entonces algo más de la mitad del territorio mexicano— y en el tequio, el trabajo no remunerado que todo indígena debía a su gente, sobre el que redactaron ordenanzas. Los usos y aprovechamientos de tierras cultivables, bosques, praderas y aguas consolidaron una economía doméstica que permitió resistir las acometidas del despotismo esclavista. El sepulcro de la libertad permaneció cerrado bajo siete llaves hasta que la invasión napoleónica de la península ibérica forzó su apertura. Los funcionarios municipales convocaron a «cabildo abierto» a todos los vecinos, algo que el derecho administrativo colonial contemplaba solo para situaciones extraordinarias. Inesperadamente, la soberanía popular transformó los cabildos en espacios públicos de fraternización, y más concretamente, en juntas gubernativas al margen de la autoridad colonial. El hecho se repitió en los levantamientos por la Independencia, donde los cabildos abiertos desempeñaron un papel decisivo, destituyendo autoridades y formando gobiernos locales que tomaron decisiones, promulgaron leyes y formularon proyectos constitucionales. Sin embargo, el desarrollo del nuevo Estado nacional apagó todo el fuego autonómico de la sociedad civil y bajo la dirección de la fracción burguesa liberal preparó el terreno al capitalismo, el régimen económico que iba a determinar en el futuro la evolución de las ciudades y el campo. El trabajo, una actividad entre tantas,

se volvería ocupación total para la mayoría, mientras que el espacio urbano se reordenaría según los designios de una nueva divinidad tan abstracta como la deidad solar o el dios católico: el dinero.

El México moderno no se construirá desde las ciudades, o sea, desde la primitiva escena política, sino desde el Estado, el factor antisocial por excelencia. A lo largo del siglo XIX, la burguesía mexicana llevó a la práctica su idea federal y se deshizo de todos los obstáculos que se interponían en su cosmovisión liberal y en su enriquecimiento privado: las propiedades de la Iglesia y de los municipios, la autonomía administrativa y jurídica local, los bienes comunales, el usufructo de bosques, praderas y aguas, los terrenos baldíos y las trabas gremiales a la explotación del trabajo. En resumen, lo que dio en llamarse inviolabilidad de la propiedad individual, desamortización y libre mercado. Luego elaboró una constitución democrática pero solo para no cumplirla, porque su propia naturaleza caciquil y latifundista le impedía forjar un régimen de apariencia democrática fiable, con división efectiva de poderes, grandes partidos estables y sufragio universal directo, sin corrupción ni fraude. De todas formas, esas carencias políticas, agravadas durante el Porfiriato, no significaron inconveniente alguno para el deslinde de las tierras del común y su arriendo a inversionistas privados, y estimularon la construcción de puertos, tendidos eléctricos y del

ferrocarril. De esta manera se conformaría un México capitalista, oligárquico, agropecuario y exportador. A principios del siglo XX solo había caminos, no siempre seguros; la primera carretera, la que comunicó el Distrito Federal con Puebla, se construyó en 1926. Así pues, fue principalmente gracias al tren que los parias de la tierra pudieron huir del trabajo forzado de las haciendas, pero solo para acabar hacinándose en las «vecindades» de las ciudades (en Argentina las llamaron «conventillos», en Cuba, «ciudadelas», y en Perú, «quintas»). ¡Ciudad de México alcanzaba en 1900 la friolera de medio millón de habitantes! La vida reproducía la separación operada en la producción: este tipo de vivienda con habitáculos reducidos y con espacios compartidos fue la solución para los pobres al problema del alojamiento, y aunque las autoridades las consideraron focos de miseria y degradación moral, lo cierto es que en dichos espacios se dio un alto grado de ayuda mutua y conciencia de clase. La cuestión social estuvo ausente en todos los bandos de la Revolución, con la excepción del zapatista, partidario del regreso a la aldea comunal, y del magonista, que quería el socialismo. Los vencedores se consideraban continuadores de la «modernización» liberal económica de la época anterior, y, tan pronto como pudo establecerse una alianza entre la burocracia política engendrada tras el periodo revolucionario —que patrimonializaba la

Administración y controlaba los sindicatos— y la oligarquía financiero-empresarial ligada a consorcios norteamericanos, debutó un periodo de industrialización acelerada, acompañada por la construcción de bloques y carreteras, que cambió radicalmente la morfología de las ciudades mexicanas. Las menos de cincuenta que había en 1930 aumentaron a ciento setenta y cuatro en 1980, momento en que se consolidó la red viaria. En pocas décadas, la nación pasó con todas sus consecuencias de país rural a urbano.

Bajo un régimen de partido único atemperado por la corrupción se produjo el salto definitivo del taller a la fábrica. Efectivamente, el desarrollo de una industria nacional destinada a sustituir las importaciones protagonizó lo que los dirigentes priistas calificaron de «milagro económico», responsable de una desbocada urbanización centrada en la capital del Estado, la que, con la ayuda primero de los tranvías eléctricos, trolebuses después, metro a partir de 1962 y, en general, una variopinta red de transportes de cercanías, empezó a modelar en derredor su propio decorado. Se rodeó de conurbaciones y para 1970 ya se había convertido en una metrópolis de once millones de habitantes. La capital era el motor principal de la economía nacional, su caja de caudales. La oposición entre campo y ciudad se exacerbó con la mecanización, los plaguicidas y los fertilizantes, resolviéndose en un éxodo rural que

tuvo consecuencias. Definitivamente, la tierra dejó de ser el crisol de la cultura y la vida social. El desequilibrio territorial y la desfiguración del paisaje agrario empeoraron aún más con la extracción de petróleo y la construcción de presas hidráulicas, que forzaron desplazamientos violentos de pobladores, mientras que la urbe industrial, ante la oleada de desocupados y la proliferación del automóvil, se veía incapaz de hacer frente a la demanda de vivienda pública, al déficit del transporte colectivo, a la falta de equipamientos y a la carencia de infraestructuras. Los expertos del Estado paternalista eran conscientes del desorden y desarreglo que el crecimiento económico había provocado en las ciudades, pero lejos de cuestionarlo, se dispusieron a despachar sus males mediante la «planeación», es decir, que buscaron soluciones técnicas en vez de sociales. Los planes de regulación, desarrollo urbano y asentamiento que el Estado autoritario mandó elaborar a sus técnicos en nombre del orden y el progreso durante los sesenta y setenta del siglo pasado, traslucían una ideología funcionalista tomada prestada de los CIAM y la Escuela de Chicago.[1] La ciudad se contemplaba ahora como el

[1] El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) fue un conjunto de encuentros internacionales donde, de alguna manera, los técnicos (arquitectos y urbanistas) se erigirían en lo que hoy conocemos como «especialistas» en

espacio de racionalización correspondiente a las exigencias técnicas y policiales del régimen capitalista. Las calles y plazas públicas se suprimían como lugares de encuentro, intercambio y libre expresión, para reconvertirse en espacios de circulación. No nos extrañemos ante el hecho de que la zonificación o división de la ciudad-máquina en áreas de trabajo, habitación y esparcimiento recrease una ciudad esquemática por medio de agregados, «células» y «zonas» netamente separadas a la que sus habitantes se habían de adaptar como a un lecho de Procusto. Se quería entronizar un nuevo orden espacial apoyado en una arquitectura uniforme y monótona hecha a base de unidades o proyectos habitacionales (en España se llamaron «polígonos»), naves y ajardinamientos, reflejo de la mentalidad de aparato cuyo poder pretendía simbolizarse en rascacielos como la Torre Latinoamericana o el complejo WTC. El resultado fue un mosaico de fragmentos dispersos sin identidad cuya realización ignoraba las relaciones sociales al tiempo que alimentaba la especulación

la planificación territorial a la vez que construirían una determinada noción de ciudad, arquitectura y urbanismo. El primero se celebraría en La Sarraz (Suiza) en 1928. La Escuela de Chicago, pionera en el uso de rascacielos y mastodontes de acero y cemento, sería uno de sus máximos exponentes. Las orientaciones instrumentales y fragmentadoras del CIAM emanan de una visión capitalista moderna del espacio social. *(N. de la E.)*

inmobiliaria y facilitaba la dominación. Los alineamientos haussmannianos, ensanches, corredores, avenidas monumentales y grandes espacios abiertos (como el de la plaza Tapatía en Guadalajara) ocasionaron pérdidas patrimoniales importantes y destruyeron el tejido social de los barrios afectados por la regulación; las diferencias en el nivel adquisitivo segregaron a las capas pobres de población e incluso a las clases medias, transfiriéndolas a los suburbios densificados, reducidos a la función de dormitorio. En paralelo, la burguesía huía del centro hacia urbanizaciones privadas exclusivas similares a las norteamericanas. Ya que la velocidad era la característica mayor del progreso económico, el tránsito rodado era el eje donde pivotaba el urbanismo de los planes reguladores y los negocios. Su racionalización alumbró trazados rectilíneos inacabables, glorietas, rotondas, túneles, autopistas y accesos que, lejos de vertebrar las nuevas ciudades, terminaron por descoyuntarlas. Finalmente, el crecimiento demográfico explosivo propició la autoconstrucción de asentamientos irregulares en suelo ocupado no urbanizable por parte del gentío excluido de todos los mercados, del laboral al de la vivienda, dando lugar a un contraurbanismo marginal, una eclosión de edificaciones improvisadas que en Brasil se denominaron favelas, en Chile, callampas, en Venezuela, ranchos, y en Argentina, villas miseria. Con el tiempo, los frutos de la «tugurización» llegarían

a ocupar entre el 30 y el 60% de la superficie de las metrópolis latinoamericanas. La creación histórica que llamaron ciudad escapó definitivamente al control de sus mismos dirigentes perdiendo su forma y sus límites: sencillamente estalló. Dejó de ser el lugar civilizado de la historia para ser el escenario salvaje de la economía. La protesta surgió desde dentro, desde el México culto y «desarrollado», debido a la ruptura de la juventud de las nuevas clases medias con el *statu quo* de la burocracia corrupta. La masacre de Tlatelolco de 1968 significó entre otras cosas el final del consenso interclasista relativo al proceso de modernización tutelada de la sociedad mexicana.[2]

El periodo desarrollista acabó en 1982, cuando el mercado nacional no pudo sostener la tasa de crecimiento requerida, sumiendo al país en una crisis

2. En octubre de 1968, durante una convocatoria del movimiento estudiantil en la plaza de las Tres Culturas, miembros de la policía, el ejército y paramilitares del Batallón Olimpia desataron una violenta represión, utilizando fuego real contra los manifestantes. Además del arresto de 1345 personas, la cifra de muertos está entre los 44 reconocidos oficialmente por el Archivo Nacional de Seguridad (institución no gubernamental norteamericana), y los cerca de 400 que señalan algunas investigaciones. Véase el impresionante documento *La noche de Tlatelolco*, de Elena Poniatowska, publicado numerosas veces por Ediciones Era, de México. *(N. de la E.)*

profunda que se tradujo en endeudamiento, pobreza y, para variar, en un sorprendente incremento de la población urbana. La suburbanización prosiguió a pesar del parón económico: se volvió autónoma. La clase dirigente mexicana, como todas las demás, obedeció los dictados de la OMC y el FMI y viró hacia el neoliberalismo. Así pues, mediante diversos tratados y acuerdos eliminó todas las barreras a las finanzas mundiales, lo que comportaría recortes de subsidios, privatizaciones de empresas públicas (algunas tan importantes como la Banca, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos y comunicación por satélite), el fin del planeamiento urbano, el auge de las maquiladoras y la entrega del territorio a los promotores turísticos y a las multinacionales extractivas. El sector terciario tomó la delantera (los servicios constituyeron el 76% del PIB en el 2000) y, en fin, se produjo un cambio cualitativo en la sociedad mexicana. En lo sucesivo, el Estado desempeñaría un papel subsidiario de una economía-mundo que absorbía y digería las economías nacionales. La tendencia a la concentración poblacional en áreas metropolitanas se acentuó con ese «ajuste estructural», y la fuerza centrípeta de las metrópolis se hizo incontrolable. El conjunto conurbado alrededor de la capital sumaba veintisiete millones de habitantes en el 2000. Frank Lloyd Wright, al observar las confusas tramas de las grandes urbes estadounidenses, dijo que eran «la forma universal de la

angustia». Quince conurbaciones mexicanas superaban el millón de habitantes, pero el rasgo más llamativo fue el crecimiento de las ciudades medianas. El número de regiones metropolitanas en el 2000 se había elevado a cincuenta y seis, con la particularidad de que las coronas exteriores superaban en habitantes a los centros, evidenciando claramente la fractura social de una expansión sin sentido. El chabolismo se hacía ubicuo a la par que la desigualdad: las dos terceras partes de las viviendas eran autoconstruidas y carecían de los más elementales servicios. La población urbana alcanzaba los sesenta y seis millones, cerca del 70% del total. México dejaba de ser simplemente urbano para convertirse en un país metropolitano. La metropolitanización, muy ligada a la mundialización, forzaba una reconfiguración brutal del territorio. Los imperativos de accesibilidad y movilidad exigían ahora grandes vías de alta velocidad, un parque automovilístico extenso, redes privadas de transporte colectivo, amplias zonas de aparcamiento y nuevos aeropuertos más extensos. En lo que respecta al transporte público no rentable, y por lo tanto, de difícil privatización, en Ciudad de México, por ejemplo, se constituyó en el 2000 una red de autobuses, la RTP, para atender el desplazamiento en las barriadas marginales hacia estaciones de metro, pero en los años siguientes se intentó construir un sistema de corredores (Metrobús) de mayor alcance.

Finalmente, tras varios proyectos fallidos a causa de los conflictos de intereses entre los diferentes aparatos burocráticos y las constructoras foráneas, en 2008 se inauguró una línea del tren suburbano de la Zona Metropolitana, «la vía rápida al bienestar», o sea, a la globalización. Por otra parte, las necesidades de las áreas metropolitanas se elevaban exponencialmente: los suministros requerían presas, acueductos, gasoductos, importaciones, nuevas fuentes de energía…, y así sucesivamente. En definitiva, el país funcionaba, es un decir, como un sistema policéntrico metastásico coronado por una megalópolis bien integrada en el mercado global, sin límites y con un déficit crónico de arterias. El fenómeno urbano ya estaba en todas partes, se había generalizado, pero a lo bestia, como no-ciudad, como suburbio total, como reino inhumano de la completa separación.

La generalización de lo urbano es un fenómeno universal, pero en los países donde las condiciones reinantes no son suficientemente capitalistas —y por eso los llaman «subdesarrollados» o «en vías de desarrollo»— presenta rasgos específicos que intensifican su fragilidad e inestabilidad. Ya hemos señalado la multiplicación de los guetos debida al desarrollo caótico, desenfrenado y autónomo de las aglomeraciones urbanas en América Latina. La falta de capitales es otro, algo paradójico pues la Zona Metropolitana del Valle de México ha sido el principal destino de las

inversiones extranjeras y en ella se concentraron las oficinas de la mayoría de corporaciones internacionales. El crecimiento hipertrófico informe es una consecuencia palpable, igual que la insuficiencia, inseguridad y mal funcionamiento del transporte público, o la congestión endémica del tráfico y el tiempo perdido dentro de los vehículos, que puede llegar a las seis horas diarias. Asimismo, los basureros clandestinos, el estrés hídrico de los acuíferos próximos, la contaminación y el coste ambiental asociado. Otra especificidad: un factor de estabilización tan importante como las clases medias, los dos tercios de la población en los países turbocapitalistas, apenas sobrepasan el tercio en Latinoamérica (menos en el campo, algo más en las conurbaciones) y no se muestran tan conformistas. En cambio, la exclusión, que en España se acercaba al 20%, en México sobrepasaba el 40% en 2016 (en el Distrito Federal era el 64%). Aproximadamente la mitad de los empleos son precarios, mal pagados y sin cobertura social, y el sector informal de la economía alcanza el 23% del PIB (en España la economía sumergida tiene un peso similar). El mercado negro del trabajo absorbe más mano de obra que el sector formal, controlado por sindicatos corrompidos. Seis de cada diez empleos en México por uno de cada diez en España. Además, medio millón de personas trabajan para el crimen organizado. La excesiva violencia cotidiana revela no solo la abundancia de comportamientos sociópatas propios

de la condición metropolitana y su sistema de relaciones humanas, sino la presencia de una clase numerosa cuya estructura de subsistencia está asociada a diferentes formas de violencia y sociabilidad destructiva (narcotráfico, secuestros, mafias…), a la que Marx llamó lumpemproletariado y Jack London denominaba pueblo del abismo. Es la característica más diferencial de la metropolitanización tercermundista: la producción y acumulación suburbana de espacios y relaciones que luego el propio sistema convierte en humanidad sobrante. No se trata en absoluto de un nuevo sujeto histórico. La rebelión ciega, desesperada y manipulable del abismo conduce inexorablemente a un escenario mafioso y militarista del que solo sacarán partido el Estado represor, los dirigentes corruptos y las bandas criminales. Fuera de la barbarie urbana pero no a salvo de ella, en el campo, las sucesivas «reestructuraciones» van directamente contra la pequeña propiedad, la propiedad colectiva y la soberanía alimentaria. El modelo de autosuficiencia alimenticia característico de la agricultura de la Reforma devino un obstáculo para la expansión de las grandes corporaciones agroalimentarias y la conversión del territorio en capital. La reacción campesina se revolvió entonces contra la burocracia y la política: ningún partido ni ninguna institución la representaba. Entonces, la cuestión social ya no podía mostrarse como simple problema político tal como pretendía la oposición populista, ni por

supuesto solucionarse con elecciones. Por una parte surgirá como cuestión urbana, y por la otra, como defensa de la tierra. Así entra en escena una sociedad civil a través de nuevos actores extrapolíticos —jóvenes urbanitas, mujeres, campesinos, chabolistas, población movilizada contra proyectos lesivos— y se inaugura una nueva reflexión crítica antipatriarcal, ecologista y antidesarrollista. La represión desplegada en su contra indica que hoy por hoy la correlación real de fuerzas es menos favorable a los opresores, y que el cambio de tendencia de lo mundial a lo local no es imposible del todo.

Poderosos intereses corporativos quieren a todo el territorio —incluido el medio natural, el agua y el subsuelo— liberado de ataduras comunitarias y tratable como mercancía, a merced de proyectos desarrollistas de todo tipo. En América Latina, el extractivismo ha tomado la forma de una guerra de despojo que no duda en emplear métodos terroristas. Sus responsables no se andan con chiquitas, pues los beneficios en juego son enormes y la urgencia de las transformaciones desaconseja las negociaciones con los afectados, siempre largas y complicadas y, por consiguiente, demasiado caras. Se compran voluntades y no se retrocede ante las masacres. En contrapartida, la defensa del territorio coloca en primera línea al campesinado, y a la cabeza, a las comunidades indígenas. La libertad había huido de las ciudades que antaño fueron

su cuna para reaparecer ahora en el bando insurgente campesino. Las primeras movilizaciones de la década de 1970 contra las plantas petroleras, la construcción de un reactor nuclear, la tala de bosques de uso comunal, la apertura de minas o los complejos turísticos fueron la respuesta popular a la explotación industrial de recursos territoriales. No obstante, las primeras batallas en defensa de la tierra, si bien replantearon modos de resistencia colectiva frente al capitalismo neoliberal, la burocracia estatal, los sindicatos oficialistas y las fuerzas del orden, no cristalizaron en un proyecto social alternativo, o mejor, un plan de autogobierno, hasta 1994, cuando tuvo lugar el pronunciamiento zapatista de Chiapas. Culminando un proceso de autorganización indígena en combate contra los grandes propietarios y la política represora del gobernador, las comunidades zapatistas constituyeron un ejemplar escollo contra la marea extractivista. Significaron el despertar reivindicativo de los derechos del pueblo nativo (puesto luego de manifiesto en la creación de un Congreso Nacional Indígena),[3]

[3] Según su propia definición: «El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas, es decir un espacio donde los pueblos originarios encontráramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas […]. Somos los pueblos, naciones y tribus originarios de este país México: Amuzgo, Binnizá, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comcac, Cuicateco, Cucapá, Guarijío, Ikoots, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Ñahñu/Ñajtho/Ñuhu, Náyeri, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, Sayulteco, Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Tohono Oódham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixárika, Yaqui, Zoque, Afromestizo y Mestizo», bit.ly/3xLXBi3.

que, a juzgar por los apoyos obtenidos y las luchas que inspiró en todo el país, se colocaba de nuevo en el centro de la cuestión social. La reforma del artículo 27 de la Constitución en 1992, que liquidaba las conquistas agrarias de la Revolución, había caldeado el ambiente, el cual entró en ebullición con la expropiación criminal de tierras, principalmente ejidales y comunales, de cara a construir las grandes infraestructuras inútiles que exigía «el progreso y la modernización», es decir, el dictamen de los mercados internacionales. Las movilizaciones autónomas contra la construcción de embalses, las concesiones mineras y madereras, y, por encima de todo, el conflicto del nuevo aeropuerto de Atenco, revelaron la defensa del territorio como eje central de la nueva lucha de clases. A menudo, las luchas por sobrevivir han generado formas de autogestión, autodefensa y justicia basadas en organismos asamblearios, como en la Comuna de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, Santa María Ostula o Cherán. También han

revitalizado el tequio y la ayuda mutua, y reivindicado los derechos de las mujeres y la autodeterminación de los pueblos. La globalización ha convertido el territorio en factor estratégico principal, y a sus defensores, en la personificación del nuevo sujeto revolucionario, ajeno a los mercados y refractario al Estado y las metrópolis. Dicho sujeto descubre que su modo de vida, su propia existencia como comunidad, se opone a la mercantilización del territorio y encuentra en la autonomía territorial —la autodeterminación— el primer gran objetivo que hace posible todos los demás. Un cierto embrión de civilización libertaria florece de nuevo en la tierra.

A pesar de las resistencias, el caudal subversivo de la defensa del territorio se diluye ante el océano urbano. El espíritu comunitario —«la alegría recobrada de convivir» de la que habla Raoul Vaneigem— no ha conseguido extenderse en las metrópolis posmodernas y, por lo tanto, no se han desarrollado en su seno contrainstituciones autónomas ni formas de vida libres de apremios mercantiles similares a las agrarias en cantidad apreciable. Bien al contrario, la crítica radical no ha llegado a influir de forma efectiva en las urbes y los programas anticapitalistas se han ido arrinconando en beneficio de un posibilismo político ramplón. Por eso, la reacción antineoliberal que despertó el año 2000 en el continente y llevó al poder a movimientos populistas consagró al Estado como instrumento fundamental de intervención

en la esfera económica y social. Las organizaciones que la impulsaron o apoyaron fueron invariablemente cooptadas y transformadas en instrumentos de desmovilización y control, mientras que se levantaban desde arriba aparatos asistenciales destinados a contener a las clases desfavorecidas y mantenerlas en calma, adormecidas, a base de programas sociales. Dentro de una economía global inalterada, la maquinaria redistributiva del populismo funcionó mientras la demanda internacional de materias primas fue pujante, pero la debacle económica de 2008-2012 obligó a los Gobiernos populistas a dar un giro conservador hacia modelos más extractivistas y desarrollistas a fin de mantener el voto cautivo. En México, una suerte de nacionalpopulismo interclasista renació en las metrópolis con la crisis de la partitocracia, y su última versión no ha tardado en mostrar su verdadera cara con megaproyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto o el Proyecto Integral de Morelos. Mumford advertía en su libro *La ciudad en la historia* que las metrópolis eran «un mundo donde las grandes masas de la población, incapaces de alcanzar un medio de vida más pleno y satisfactorio, viven su vida por persona interpuesta, en calidad de electores, espectadores, oyentes y observadores pasivos».[4] La complejidad y el tamaño

4. Lewis Mumford: *La ciudad en la historia*, trad. Enrique

de los conglomerados urbanos prohibían la menor sociabilidad práctica y la más mínima cultura política; por consiguiente, impedían cualquier planteamiento de clase generalizado. ¿Qué tipo de proyecto libertario, por ejemplo, podría llevarse a cabo en una incontrolable tiranópolis de treinta millones de habitantes? A pesar del elevado grado de desagregación política y social del país, las condiciones patológicas de una vida urbana extremadamente artificial y dependiente, monetarizada, centrada en la vida privada, el anonimato y el consumismo individual no dejan espacio suficiente para la constitución de una sociedad civil apartada del Estado. Sí que existen núcleos autónomos periurbanos, pero a la fuerza, puesto que es el Estado quien deserta de allí. En general, la anomia condena a la población aprisionada en las conurbaciones a no ser más que público mayoritariamente pasivo, indolente y desmemoriado de un caudillo redentorista, y masa de maniobra para el «reajuste electoral» de un sistema de partidos en bancarrota.

Las metrópolis han sobrepasado el límite que las hace gestionables, pues el despilfarro económico que requiere su administración es imposible de asumir y desemboca en la muerte del fenómeno urbano.

Luis Revol (rev. Javier Rodríguez Hidalgo), Pepitas de Calabaza, Logroño, 2014, p. 912.

La crisis final del sistema de producción del espacio urbano está servida y el colapso social será inevitable, por lo que si bien la adaptación al desastre es la consigna interna del nuevo capitalismo —la conversión de la catástrofe en mercancía—, el desmantelamiento metropolitano ha de ser el eje del pensamiento crítico y la acción radical transformadora. Hay que reconstruirlo todo, pero en dirección diametralmente opuesta a la que indica el capitalismo de la «resiliencia» y del salto hacia adelante en la industrialización. La lucha por una sociedad libre y equilibrada ha de ser una lucha por la ciudad entendida en su concepción original de comunidad autogobernada en pie de igualdad con su territorio. No obstante, solamente un proceso desurbanizador y municipalista que, al crear condiciones propicias para la autonomía en todos sus aspectos, logre desmontar las metrópolis y provoque un repliegue comunal capaz de propiciar la *vita activa* en la que incidía Hannah Arendt, haría que sus fragmentos autogestionados confluyeran como espacios de libertad ciudadana en un mismo esfuerzo emancipador con las comunidades agrarias. Pero tal eventualidad no será posible desde dentro mientras los flujos de capital sean tan potentes y sigan tan omnipresentes. Una estrategia antidesarrollista que buscara la salida del capitalismo debería tratar de cortocircuitarlos.

Recuperar la memoria, desmercantilizar el mundo, desmetropolitanizar la vida. Esa es la cuestión.

Contribución al seminario «La lucha por la vida en las ciudades. Defensa del territorio, irrupciones subterráneas, proyectos de autonomía», organizado por la Cátedra Jorge Alonso de la Universidad de Guadalajara (México). Sesión del 16 de junio de 2021

Cuando los bárbaros invadieron la periferia

Mercantilización y destrucción del Pirineo catalán

En un mundo globalizado, luego en una sociedad urbanizada, donde buena parte de la población tiene bastante capacidad adquisitiva, vehículo propio y suficiente tiempo «libre», los servicios de relax y evasión llegan a ser el sector de la economía más expansivo. En la sociedad de consumo el ocio ocupa un lugar cada vez más importante en la vida alienada. En la periferia, al colapsarse la producción industrial por falta de competitividad y escasa innovación tecnológica, la economía se refugia en otras actividades con menor valor añadido, por ejemplo, la logística, la construcción y por encima de todo el turismo de masas. Este es el caso del Estado español, y como corolario, el de Cataluña. Una vez pasada la crisis de 2008-2014, concretamente en el ámbito catalán, el

turismo industrial se ha convertido en el motor económico principal, lo que supone inevitablemente un impacto y una alteración profunda del territorio, cualitativamente superiores a todo lo sucedido hasta ahora. Una huella ecológica superlativa. El turismo «es una fuente de riqueza» y un «impulsor del crecimiento», dice un tecnócrata de la Generalitat, pero también es una industria que ocasiona trastornos inmediatos; es un factor de desequilibrio y de trivialización de primera magnitud, además de un yacimiento de trabajos basura y un promotor vigoroso de la construcción y de la alimentación industrial. Las inversiones foráneas, la construcción de nuevas urbanizaciones, equipamientos e infraestructuras, la sobrexplotación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico, el despilfarro de energía, la contaminación y la acumulación de residuos a gran escala, etc., son los heraldos de una nueva realidad territorial. Estas señales tan bárbaras revelan el verdadero significado de lo que los dirigentes, técnicos, expertos y asesores llaman «poner en valor» el territorio, «optimizar» sus recursos, «rentabilizarlo», y como colofón, «fomentar tejido emprendedor» y «ejercitar liderazgos». Este léxico, pedido prestado al marketing, revela claramente la transformación del territorio en mercancía. En consecuencia, patrimonio, costumbres, historia y naturaleza constituyen un capital de nuevo tipo. Cuando acabe el proceso de valorización, que también es de reglamentación,

cualquier otra actividad que no encaje en la «oferta» territorial, o sea, que no acarree beneficios pecuniarios, como por ejemplo la agricultura y la ganadería tradicionales, la cooperación desinteresada, el trueque, la hospitalidad y el esparcimiento gratuito, tienen los días contados. Pagaremos por todo, tanto por las setas recogidas como por acampar o contemplar de cerca un salto de agua. La rentabilidad del negocio del esparcimiento obligará a ello si es que no lo ha hecho ya. La gestión del territorio como si se tratara de una empresa, o dicho de forma más técnica, su transformación en marca, dejará a sus habitantes fuera de las decisiones, expropiados, puesto que las únicas necesidades que importan son las exigidas por la acumulación de capitales y las dinámicas de poder, no las del vecindario. La vida en las comarcas de montaña quedará entonces totalmente redefinida por las jerarquías políticas, administrativas y financieras que determinan en cada momento el uso del territorio, uso fijado por continuos planes de desarrollo, a cada cual peor.

La cosa viene de lejos. Lo que contemplamos hoy no es más que la integración de un mercado regional en un mercado global. El proceso de mercantilización en las montañas pirenaicas empezó en los años sesenta con la construcción de las estaciones de esquí de Baqueira Beret y Masella (ya existían las de La Molina y Vall de Núria). Dicho proceso no tomó nuevos bríos hasta mediados de

los años ochenta con el boom de las segundas residencias, disparándose una década más tarde con la apertura de nuevas pistas (actualmente son diecisiete), la nieve artificial, la popularidad de los deportes de aventura y la práctica del alojamiento rural. La primera fase no tuvo gran impacto, pues el coche utilitario no daba para mucho y el televisor, que hacía su aparición en los hogares proletarios, mantenía pegados a los individuos a sus sillones. La segunda fue peor, ya que la motorización general acrecentó sobremanera la movilidad ciudadana. El ocio se «democratizaba»; un primer plan de ordenación de las estaciones trataba de perfilar el negocio de la montaña mientras la despoblación se detenía en esas alturas. La decadencia de la ganadería y la agricultura de siempre, la crisis definitiva del textil y el cierre de la minería abrieron la puerta de par en par a la explotación intensiva de la nieve, los ríos, los prados, los bosques, las cumbres, las masías y los senderos. La tercera fase, correspondiente a la creación de la marca Pirineos, requirió la ayuda del Estado y la inyección de capitales. La conectividad con los centros emisores de turistas se volvió esencial. Por eso eran necesarios grandes gastos en carreteras, pistas, accesos, líneas de alta tensión, canalizaciones, vertederos, túneles, viaductos… Miles de vehículos circulan a diario por la zona provocando embotellamientos durante los fines de semana y los periodos vacacionales, lo cual

exige perentoriamente nuevos carriles, desdoblamientos, variantes, nuevos enlaces y mejoras diversas. Urgían desembolsos de consideración en equipos, suministros y servicios complementarios, como por ejemplo aparcamientos, telesillas, gasolineras, depósitos de agua para los cañones de nieve, caballerías, garajes, almacenes, hangares, comercios, etc. El tramo de autopista Barcelona-Manresa quedó dispuesto en 1994 y la autovía Manresa-Berga, en 1999, favoreciendo como nunca la llegada del alud urbanita. Barcelona engullía a Cataluña: las condiciones barcelonesas de vida se habían extendido por todas partes. En las comarcas, la población entera se convertía en rehén de una economía caníbal irradiada desde la metrópolis. La cuarta fase, la de la internacionalización de la marca, está relacionada con la llegada masiva de turistas de otras regiones españolas y extranjeros (el 40% del total). Comenzó en 2004 con el Plan Estratégico del Turismo de la Nieve y la creación de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, una estructura transnacional, y constituye un salto cualitativo en el desarrollo desequilibrado y violento del territorio, fundado en un incremento superior de instalaciones, la ampliación de la red de transporte y una desintegración social calculada. El proyecto disparatado del macrocomplejo de la Vall Fosca, una especie de Eurovegas pirenaico, ilustra, si fuera necesario, el delirio desarrollista

de los dirigentes actuales.[1] El crecimiento no puede demorarse. Gracias a la aportación interesada de capital exterior, el territorio montano está siendo «ordenado» con planes territoriales para soportar la llegada de un montón suplementario de turistas venidos de otra parte. Los billetes de avión, la visita a los casinos y el paseo por la playa irán incluidos en el lote. El objetivo no puede ser otro que la completa transformación de las comarcas pirenaicas en un grandioso parque temático, una Disneylandia alpina.

La industrialización de la economía catalana primero, seguida de la terciarización, habían creado un monstruo, el área metropolitana barcelonesa, que formaba un sistema urbano con otras conurbaciones menores conectado por autovías, autopistas y circunvalaciones. Y aquel monstruo albergaba a una extensa clase media con unas ansias de consumir territorio a tener en cuenta. Mientras tanto, la vida en la metrópolis había llegado a ser tan pobre, tan claustrofóbica, que las ganas de desconectarse aunque fuera solo un poco, de escapar hacia la naturaleza

1. Situado en el término municipal de Pallars Jussà (Lleida), el proyecto, impulsado por la inmobiliaria Martinsa-Fadesa (que en 2008 entraría en concurso de acreedores), pretendía construir «45 kilómetros de pistas de esquí, un campo de golf, un spa de 2500 metros, una zona village (con comercios y restaurantes) de 5000 metros, un gran centro de convenciones con capacidad para 1000 personas, 2400 plazas de hotel y 900 vivendas», bit.ly/3oez41W.

como antes hacían los burgueses y los aristócratas, fueron irreprimibles. Para esta clase, y para el proletariado que la imitaba en lo que podía, la ociosidad no era descanso e inactividad, sino ponerse en movimiento y hacer cualquier cosa que estuviera de moda. Así pues, el aburrimiento y el hastío dieron lugar a la mercantilización del ocio, mediante la cual este se volvía trabajo. El tiempo «libre», merced al estrés y al vacío de la vida privada en la conurbación, se convirtió en la materia prima de una industria capaz de empujar hacia arriba la demografía comarcal pirenaica, desarticular el territorio, orientar la vida de su gente hacia el consumismo, halagar el mal gusto de los visitantes y arruinar la belleza del entorno. El bronceado de montaña se volverá entre los metropolitanos un detalle de distinción, un trofeo, el rasgo diferencial de la marca Pirineos. El régimen capitalista tenía en los fugitivos de la metrópolis su base social más ferviente, dispuesta a votar disciplinadamente a cualquier candidato proturismo, y todos lo eran. Mientras esto sucedía, los grandes beneficiarios de la invasión de los excursionistas motorizados domingueros venidos de todas partes se relamían por el éxito en FITUR y por el reconocimiento de la zona pirenaica como destino turístico de excelencia por parte de la Unión Europea. Los Pirineos se sumergían en el mercado europeo y Barcelona compartía con otras conurbaciones transfronterizas la función colonizadora.

Era la plasmación última de la idea de progreso: el dominio nocivo y maligno de la naturaleza y la sociedad montañera por la ciencia, la tecnología, la economía y el Estado.

Todo el deporte de montaña, del helibike al barranquismo, del trekking al snowboard, del parapente al esquí nórdico, es una concreción de la mentalidad capitalista primigenia: gusto por la competición, superación del obstáculo, resiliencia, culto al esfuerzo, atracción por el riesgo, exhibicionismo... No obstante, para los directivos síquicamente agotados por el trabajo el comercio montaraz dispone una cura a base de hidroterapia y tratamientos sicofísicos (*wellness*).[2] El espíritu del capitalismo renace a partes iguales con el deportista y el ejecutivo neurótico, pero todavía más en los especuladores: los negocios inmobiliarios de la costa y el área metropolitana se dan con menos trabas en las comarcas del interior, ya que la ganancia es lo único que cuenta y el beneficio económico del turismo, comparado con el de cualquier otra actividad anterior, es de una superioridad aplastante. Hoteles,

2. *Wellness* es una seudoterapia que trata de reparar el deterioro mental, físico y emocional de los individuos bajo régimen capitalista, con la idea de lograr un equilibrio mínimo entre la mente y el cuerpo que garantice un funcionamiento laboral eficiente y una conducta social que no cuestione el orden vigente.

campings, campos de golf, promociones, discotecas, locales de comida basura, centros comerciales y automóviles a espuertas reproducen las condiciones del hábitat urbano e imponen los valores de una vida prisionera del consumo. Suben los precios de la tierra y de los alquileres de las casas, el folklore local se degrada en espectáculo, las fiestas adquieren un toque superficial y carnavalero; el pasado se museifica y en definitiva los nexos morales se cambian por otros comerciales. El turista no tiene ningún interés en conocer los lugares que pisa y menos aún a sus habitantes, por lo que se conformará con estereotipos. No es demasiado partidario de la autenticidad: con unos pocos elementos de color local y unos cuantos productos típicos tendrá suficiente. El ángel del *kitsch* le acompaña y protege de una originalidad excesiva: la vulgaridad y el mal gusto mandan. Podemos decir que la metrópolis proporciona una nueva forma material y espiritual al territorio; lo uniformiza, lo debilita y lo corroe sin que este pueda defenderse, falto de fuerzas y medios. El turismo deja la sociabilidad local en una situación mucho más frágil que antes. Fin del espíritu comunitario, de la mano solidaria, de la mismísima noción de pueblo. Cuando el coche se convierte en una especie de prótesis del habitante de la gran urbe, el territorio se encuentra sometido absolutamente por ella y acaba por reflejarla en todos sus aspectos. Es ya un espacio periurbano, un satélite

de la aglomeración metropolitana. La vida parasitaria ahora desempeña en él un papel decisivo y de rebote nacen nuevas clases emprendedoras y neorrurales ligadas directa o indirectamente al desarrollo unidireccional establecido. Para cambiar las cosas en el campo habría que cambiarlas en la ciudad. Para rehacer una vida sin apremios económicos en la periferia sería necesario desmantelar el centro. Nada liberador será posible si no salimos del capitalismo, pero no saldremos de él si dejamos atrás intactas todas sus estructuras.

A medida que las fuerzas destructivas del entramado turístico ganan terreno, se diversifican y se desestacionalizan, los espacios agrestes se masifican y despersonalizan, el paisaje se erosiona y la naturaleza retrocede; la flora se marchita pronto y la fauna se contrae y emigra a donde puede. Las contradicciones del desarrollismo se manifiestan en forma de urbanización desbocada, crisis ecológica, agotamiento de recursos y malestar social. Aunque la conciencia del carácter eminentemente devastador del crecimiento económico no surja de forma clara como oposición frontal fuera de minorías que se empeñan contra viento y marea en la defensa del territorio, la inquietud de quienes dependen económicamente del turismo ante las pérdidas debidas a la saturación ha despertado una determinada sensibilidad por la conservación y la protección del medio. La expresión mágica de «turismo sostenible» se halla en boca de

los representantes de los denominados «actores sociales»: organizaciones de empresarios, Administración, grupos ecologistas, sindicatos y partidos políticos. Si bien el modelo de mercado permanece incuestionable, en paralelo sale la propuesta de «desarrollo local alternativo». Esta clase de desarrollo quiere ligar consumo, estropicio y crecimiento con reposición y equidad, a base de «instrumentos de intervención y transformación de la economía», es decir, con leyes, ordenanzas, tasas, contratos y programas promovidos o apoyados por las instituciones. No se pretende una desmercantilización del territorio, sino una explotación menos agresiva, recurriendo a una red económica marginal que sirva de paliativo y haga contrapeso al saqueo imparable del desarrollo puro y duro. Nada se cuestiona, ciertamente no el sistema capitalista. Se reivindica un uso sostenible del suelo sin pensar en desurbanizarlo; se pondera el derecho a escoger y cultivar los propios alimentos sin tocar la industria agroalimentaria; se piden normas racionales sin derogar las directrices actuales, bastante permisivas en lo que se refiere a negocios dudosos; un derecho consuetudinario sin menoscabar el derecho mercantil; en resumen, se reclama un turismo menos convencional, más ecológico, ignorando que ecología y turismo son términos antitéticos. En cualquier caso, ese turismo de algodón nunca alcanzará más que una parte minúscula de la demanda; nada comparable con el turismo de masas. Sin embargo,

las nuevas clases medias de las comarcas pirenaicas observan la destrucción del territorio con preocupación, puesto que sus intereses salen a la larga perjudicados, pero no desean enfrentarse con los responsables. Son románticas y materialistas al mismo tiempo, burguesas y populistas. Están sentadas entre dos sillas. Quieren desarrollo y progreso sin las consecuencias que se derivan de los mismos. Quieren relaciones equilibradas con el medio sin sacarlo de la economía de mercado ni de la tutela del Estado: quieren a fin de cuentas la lluvia (o mejor la nieve) y el buen tiempo.

Ni la regeneración del territorio, ni la restitución a sus auténticos pobladores pueden hacerse a medias, ni tampoco pueden llevarse a cabo legítimamente desde la Administración, la política o la propia economía. La cogestión entre autoridades, sindicatos, clubes juveniles y empresarios solo es un mecanismo para armonizar el desarrollo más catastrofista con los intereses de la población medio domesticada, con el fin de hacer innecesarios los conflictos. Los típicos clichés de «sostenibilidad», «responsabilidad», «participación», «democracia transversal», «calidad» o «proximidad» lo demuestran bien a las claras. La democracia territorial es algo completamente diferente y tiene más que ver con la capacidad vecinal de organizarse autónomamente y de vivir en común sin mediaciones mercantiles ni dirigentes. Para revitalizar el territorio hay que desparasitarlo, lo que equivale a sacarlo de la economía mediante una

acción descentralizadora, desindustrializadora y desurbanizadora que comportaría, por un lado, un enfrentamiento con las clases dominantes y sus servidores políticos, y por el otro, una ruralización salvaje. Los ruralistas han de sostenerse en base a un compromiso sólido, pues necesitan objetivos claros y estrategias a medida. Las ocupaciones y movilizaciones en defensa del territorio han de permitir una correlación de fuerzas favorable a la autonomía campesina, lo justo para animar otro tipo de huida de las conurbaciones, de modo que no solamente se puedan repoblar los lugares abandonados o en trance de serlo, sino que además se pueda articular una red campesina y ganadera resistente a las normas, los reglamentos y los controles administrativos. A pesar de que cerca de quinientos municipios catalanes están en peligro de extinción al caer fuera de los circuitos turísticos, cada vez resulta más difícil una repoblación libre y una agricultura independiente. El Estado se mete por en medio cuando no lo hacen las fuerzas vivas municipales o los hombres de negocios, proscribe la ocupación de tierras y casas abandonadas, registra el ganado, cuenta los árboles y los cultivos, vigila las simientes, detecta a los huéspedes, en fin, regula toda actividad. Obliga a etiquetar los productos, fotografía los edificios y propiedades, prohíbe la venta directa, fija cuotas y precios, especifica pagos y cobra impuestos. Pocos son los que se quejan abiertamente y su voz no se oye de lejos. Otros prefieren

ser «pragmáticos» y pasar por el aro. A pesar de todo, la lucha continúa.

Dada la opinión mayoritariamente favorable al turismo, la defensa del territorio ha de empeñarse seriamente en una campaña de información. Por otro lado, convendría remarcar sus dos vertientes, la desmanteladora y la reconstructora. Es una doble lucha por liberar el territorio de la economía y por impulsar una vida libre en el campo, arraigada, en equilibrio con el entorno y ajena tanto a la normativa como a la mística. Es una pelea constante por frenar los grandes proyectos inútiles de las constructoras y los gobiernos y por cerrar el paso a las frenéticas hordas urbanas y a las complacientes administraciones locales. Un combate por crear formas de autogobierno y de trabajo colectivo, por volver a los concejos abiertos (en el Berguedà había dos, Fígols y Sant Jaume de Frontanyà), las juntas vecinales, los campos abiertos y los bienes comunales. Por consiguiente, también es una lucha por reencontrar la ciudad, por darle dimensiones humanas y ponerla en marcha desde el ágora. No puede existir un territorio libre que envuelva a una urbe esclava, ni una ciudad emancipada dentro de un territorio subordinado.

Charla en el casal d'avis de Berga, celebrando el séptimo aniversario del grupo Piolet Negre, 24 de febrero de 2018

Luna de miel en Mallorca

La destrucción sostenida e implacable del litoral, y partiendo de ella, del interior más o menos cercano, no es un fenómeno exclusivo de Mallorca, sino de todo el Mediterráneo, por lo que sus efectos son visibles por todas partes en mayor o menor cuantía, de acuerdo con el nivel de avance de la especulación inmobiliaria y la construcción de cinturones viarios o variantes. Lo que tienen de especial las Baleares es que dicho fenómeno puede observarse en estado puro y a escala reducida, cosa que las convierte en un laboratorio donde es posible estudiar la involución de una pequeña porción de sociedad, rodeada de agua, en función de la adaptación de sus recursos territoriales y bienes culturales, que son comunes, a una sola actividad económica, que es privada y persigue únicamente el enriquecimiento particular.

Definitivamente, todos los males de los mallorquines derivan del turismo. El turismo es la causa principal de la destrucción del territorio y del condicionamiento extremo de la vida de sus moradores.

En tan solo cincuenta años, ha transformado la isla mucho más profundamente que todo lo sucedido en los dos milenios precedentes, sin embargo, no exentos de cambios. Habría que remontarse a la conquista cristiana del siglo XIII para volver a ver Mallorca convertida en un inmenso botín. El turismo ha devorado el stock de suelo e inundado de asfalto, cemento y residuos contaminantes la isla. De continuar, incluso sin crecimiento, no habrá rincón que se salve de la degradación más abyecta. Entiendo por turismo no el afán viajero del individuo que se aventura en busca de lugares pintorescos movido por la curiosidad hacia otros escenarios y otras gentes. El turista de hoy no visita Mallorca para observar las costumbres del pueblo mallorquín, minoritario y extraño en su tierra, para contemplar sus edificios históricos o para descubrir su paisaje, incapaz de apreciarlo. Es vomitado a carretadas para cortas estancias en el aeropuerto de Son Sant Joan y dirigido hacia la costa, donde encontrará un espacio a medida, desolado y completamente mercantilizado, pensado únicamente para el esparcimiento y la satisfacción de sus necesidades primarias de sol y playa tal como las conforma el negocio turístico. Todo lo demás, desde la comida a la diversión, ha de parecerse cuanto más mejor a lo que caracteriza la vida alienada que lleva en su país de origen, bien impresa en su imaginario perturbado. El turista no desea contemplar otra cosa que a sí mismo, por eso lleva con él su

propio mundo. El turista de hoy no tiene nada que ver con el viajero romántico del siglo XIX o con el intelectual hastiado de metrópolis del siglo XX. Es un producto de la sociedad de consumo, asalariado, estudiante o pensionista, cuyo ocio gregario es objeto de lucro económico.

Al menos desde los años cincuenta del siglo pasado, el turismo mallorquín es una actividad industrial en expansión que explota una numerosa mano de obra y que reporta cuantiosos beneficios a los explotadores. Dicha industria es la responsable de la conversión de la antigua sociedad agraria mallorquina, casi feudal, jerarquizada y clerical, en una moderna sociedad de masas todavía más estratificada, regida por una cúpula inmoral de políticos, empresarios y financieros. Y responsable del cambio acelerado de una moralidad católica estricta a una mentalidad permisiva, sobre todo en cuanto a los negocios se refiere. Así pues, el culto a la Mare de Déu de Lluc fue sustituido por el del Becerro de Oro. Una sociedad de curas y caciques, nacida de la victoria del bando fascista en la pasada Guerra Civil, halló la manera de prolongarse, económica y políticamente, transformando todo su territorio en un suburbio vacacional de las clases asalariadas que habitan en las tristes conurbaciones europeas. En efecto, el turismo es una actividad capitalista, prácticamente la única en la isla; todas las demás dependen de ella y en gran medida toda su población es

cautiva suya, sufriendo, consciente o inconscientemente, sus consecuencias. Todo es economía equivale aquí a todo se ha convertido en mercancía turística: geografía, vegetación, agua, clima, idiosincrasia, historia, gente. Desgraciadamente, «el turismo somos todos y es tarea de todos», tal como reza uno de los eslóganes de la clase dirigente local, es decir, que todos los mallorquines se han de mojar en lo que en otras partes se denomina «balearización», unos sacando provecho personal, y otros, los más, padeciéndola en tanto que víctimas. Unos arrinconando el catalán y otros aprendiendo inglés.

Aunque el turismo creó una nueva sociedad de clases de las ruinas de la anterior, la conflictividad laboral nunca fue remarcable; las luchas obreras no acompañaron significativamente el desarrollo urbano de Palma y la costa. La primera huelga fue la del hotel Bellver en 1973. En 1977, al calor de las luchas que se producían en todo el Estado, hubo huelgas en la construcción y en las gasolineras que emplearon métodos asamblearios. La huelga del personal del hotel Lotus Playa en 1979, la última en merecer ese nombre, ya ocurrió en plena institucionalización de los sindicatos, hecho que ocasionó la rápida desaparición del movimiento obrero mallorquín. La debilidad del proletariado insular podría explicarse teniendo en cuenta que en Mallorca la transición de la sociedad agrícola tradicional al capitalismo moderno no se hizo a través de

la fábrica, sino a través del hotel. La economía pasó bruscamente de apoyarse en la producción agraria a sustentarse en actividades como la hostelería, la logística y la construcción. Pero aunque la agricultura fuera prácticamente eliminada, el campo no se despobló, sino que se recicló en el sector de servicios, terminando por crecer en población. El proletariado necesario para la expansión de la nueva economía vino de la península, no de los pueblos mallorquines. Los sucesivos booms turísticos reportaron trabajo en abundancia que, aunque fuera de la peor calidad, permitió una supervivencia lo bastante soportable como para no plantear más problemas que los referidos a los convenios. Es más, visto desde el punto de vista estrictamente laboral, sindicalista, había una similitud de intereses entre el crecimiento del turismo y los trabajadores, empleados mayoritariamente en tan perniciosa actividad, indiferentes a sus efectos nocivos, parasitados además por una burocracia experta en desmovilizaciones. A pesar de los esfuerzos del movimiento libertario, la crítica social de la depredación del territorio no nacería en el medio obrero, por lo que adolecería durante mucho tiempo de un enfoque de clase, anticapitalista. Por consiguiente, la crítica del turismo quedaría separada de la crítica de la economía.

El desarrollo del monocultivo turístico tenía que trascender los espacios del sur de la isla en torno a Palma y Calvià, donde se hallaba momentáneamente

confinado, para entrar a saco en cualquier terreno accesible, por lo que la construcción de carreteras y autopistas se convirtió en la máxima prioridad. Dada la insularidad de Mallorca, o mejor dicho, dada la disponibilidad muy limitada de suelo urbanizable, el conflicto territorial estaba servido. El choque de intereses opuestos, urbanizadores por un lado y conservacionistas por el otro, no tardó mucho en producirse. El carácter descontrolado y destructivo de una industria extractivista como es el turismo hizo que el impacto sobre el territorio fuera salvaje, creando de rebote en una parte del vecindario una conciencia territorial que pronto se materializaría en formas de protesta organizada. La ocupación de Sa Dragonera,[1] la lucha contra la autopista Palma-Inca y la movilización por la conservación de la playa de Es Trenc, entre 1977 y 1983, marcarán un hito inaugural en la defensa del territorio. La terciarización de la economía, al promover la apropiación privada de las cuantiosas rentas del turismo a costa de la degradación de toda la isla, provocaba un enfrentamiento

1. En julio de 1977, alrededor de quinientas personas ocupaban el islote de Sa Dragonera, al oeste de la isla de Mallorca. La acción fue impulsada por el grupo libertario Terra i Llibertat, después de que el Estado aprobara la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de urbanizar el islote, cuyos terrenos habían sido adquiridos en 1974 por la empresa Patrimonial Mediterránea Sociedad Anónima. *(N. de la E.)*

entre la élite extractiva y los habitantes, que sin comerlo ni beberlo se veían abocados a ella. La tensión aumentó con el paso de la ocupación intensiva del territorio, típica de la industria turística inicial, a la ocupación extensiva más propia de las segundas residencias, signo de la urbanización de la Part Forana. Con el desarrollo de la nueva clase media y, consecuentemente, de su estilo consumista, la especulación se democratizaba, es decir, que la demanda interior se hacía presente. El aterrizaje del capital internacional acabó de agudizar el enfrentamiento. «Mallorca será la segunda residencia de Europa», dijo el cacique Gabriel Cañellas[2] mientras unos barcos cisterna llevaban agua del Ebro para los turistas de la bahía de Palma. Por entonces los ingresos por turismo cubrían el déficit español de la balanza de pagos, por lo que tal tipo de declaraciones eran muy bien vistas en Madrid. La manifestación de noviembre de 1998 contra la construcción de urbanizaciones residenciales mostró una capacidad de movilización de la sociedad civil digna de ser tenida

2. Gabriel Cañellas fue presidente de las Islas Baleares entre 1983 y 1995, por Alianza Popular, Coalición Popular y Partido Popular sucesivamente. Imputado en el caso del túnel de Soller por prevaricación y cohecho, en 1997 el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares consideró probados los cargos, pero salió absuelto por la prescripción de los delitos. *(N. de la E.)*

en cuenta, superada todavía por la de febrero de 2004, punto álgido de la defensa del territorio.[3] Tal defensa fue fruto de un antagonismo que cada vez adoptaba tintes más radicales, puesto que el turismo colonizaba enteramente la vida cotidiana de todos los mallorquines y los desarraigaba en su propia tierra, aunque sin acabar de producir un sujeto autónomo. Nótese que durante el periodo transcurrido entre los años citados, que correspondía al Gobierno del «Pacte de Progrès», la paz territorial reinó aunque el territorio no dejara de esquilmarse. Precisamente,

3. La manifestación del 12 de noviembre de 1998 bajo el lema «Ni un palmo más de cemento» reunió a treinta mil personas. Convocada por el Grupo Ornitológico Balear (GOB) y varias entidades enfrentadas a proyectos depredadores, se oponía a la expansión desarrollista descontrolada que se manifestaba en planes urbanísticos aberrantes, destrucción de suelo rústico, crecimiento exponencial del parque automovilístico, construcción de autovías, ampliación del aeropuerto, etc. Tuvo éxito, pues al poco se decretó una moratoria urbanística.
La manifestación del 14 de febrero de 2004 bajo el lema «Qui estima Mallorca no la destrueix» contó con cerca de cincuenta mil asistentes. Convocada por el GOB y siete plataformas cívicas, se erguía contra las consecuencias del nuevo Plan de Carreteras y el Plan Territorial Insular que acarreaban proyectos desmesurados de infraestructuras, recalificaciones masivas de terrenos, recortes de espacios naturales, urbanizaciones ilimitadas y, en fin, una «reconversión territorial» tremendamente destructiva.

la ausencia de un colectivo de lucha consciente de su oposición total al turismo de masas, a las urbanizaciones y a todo lo que ello comportaba, desde las centrales térmicas a las grandes superficies, pasando por las incineradoras, las autopistas y los puertos deportivos, es decir, consciente de su anticapitalismo, fue la causa de que la defensa del territorio fuese de la clase del «no por el patio de mi casa» y no superara la fase del recurso jurídico, el sentimentalismo identitario y la supeditación a la política típica de las plataformas ciudadanistas. Las luchas meramente defensivas dentro de una economía no criticada se anulan ellas mismas en sus limitaciones. La resolución definitiva del conflicto territorial no podría consistir en una legislación protectora que liberara al turismo de la corrupción y lo orientase hacia formas menos agresivas de explotación, dejando a salvo una porción más o menos grande de territorio, sino en el desmantelamiento de la mismísima actividad turística. Acabar con el turismo industrial implica una lucha prolongada contra la clase dominante que dicha actividad ha engendrado, la clase más depredadora de la historia de las Baleares, muy avanzada en cuanto a corruptelas y muy tradicional en cuanto a piratería.

La gravedad de las agresiones que acompañan a la proletarización del territorio mallorquín, superpoblado, soportando altos niveles de masificación, con todos los indicadores de estrés turístico disparados,

ha llevado a una parte de la clase dominante insular, hasta hace poco minoritaria, a la convicción de tomar medidas ecologistas sin las cuales el desastre resulta imposible de administrar. Hasta los dirigentes más obtusos saben lo que significa la pérdida de calidad de una vida prisionera del turismo. La preservación del interés privado ya no puede prescindir de la formulación de un interés general, es decir, de un verdadero interés de clase, hoy por hoy ecológico. Paradójicamente, la ecología surge ahora como solución de las contradicciones del turismo industrial, mediando por un desarrollo «sostenible» basado en la integración del coste ambiental en la factura del negocio turístico. Las tasas serían un tímido ejemplo de ello. El capital acoge en su seno al medioambiente, lo que en sí es un hecho importante, una inflexión ecodesarrollista. El escándalo de la corrupción facilitará el recambio del equipo enfangado de la derecha, y las instituciones, en poder de «la izquierda», se encargarán de propiciar un gran pacto entre las firmas internacionales, los empresarios locales, los sindicatos y los «movimientos sociales», en pro de un turismo más desestacionalizado, más diversificado y más «verde». La naturaleza también puede ser negocio con tal de que el automóvil llegue hasta ella. La sobresaturación de bañistas en la cala Mondragó es un ejemplo palpable. La política balear, siempre dócil a la dictadura del mercado turístico, se vuelve ecologista y los ecologistas figuran en las candidaturas

electorales, reflejando una conciliación entre intereses dispares, los de la explotación de los recursos isleños y los de la población, a través de leyes, ecotasas, actuaciones ambientalistas y moratorias urbanísticas. En ningún momento se cuestiona el modelo turístico en sí, ni tampoco el crecimiento de la actividad, sino que ambos se someten a una regulación restrictiva destinada a paliar los excesos anteriores. La nueva política va de común acuerdo con la nueva fase del capitalismo balear, la que corresponde al compromiso entre el turismo de masas, la institucionalización de la lengua catalana y la protección del entorno. En realidad no es más que la administración neutral de los recursos en pos de una marca rehabilitada, o dicho con más disimulo, de un «nuevo modelo turístico», también desarrollista pero controlado, todavía por ver.

La defensa del territorio y de la cultura, en la medida en que busca formar parte de la política institucional y es acogida por esta, pierde su condición de lucha social y deja de expresar el combate entre opresores y oprimidos que la había caracterizado en la etapa de la corrupción. La lucha contra la clase dominante no ha de conformarse con el simple relevo de sus jefes, unos procesados por delitos y otros quemados por las responsabilidades políticas, ni tampoco con la reordenación del territorio según nuevas leyes pactadas. La huella ecológica de las Baleares equivale a la de una extensión

seis veces superior. El grado de descomposición social debido al modelo turístico que, recordemos, no es más que una pieza del entramado económico globalizado (y que es la forma específica que reviste en las Baleares el capitalismo global), ha llegado a tal punto que incluso el problema más trivial —que el agua del grifo sepa a agua— exige soluciones que lo cuestionan en su conjunto, puesto que las susodichas soluciones implican una transformación íntegra de las relaciones sociales y del espacio que las alberga. Así pues, una cuestión seria como por ejemplo la energética nunca podrá resolverse sin sustituir la economía de mercado y el Estado por otra forma de convivencia social más justa, equilibrada e igualitaria, ajena a mediaciones mercantiles y partidistas. Ninguna energía descentralizada podría implantarse socialmente sin desarticular las estructuras dominantes, aboliendo el beneficio privado y con él, la explotación del territorio y de sus habitantes.

La industria turística depende absolutamente del agua y de la energía. No hubiera podido superar el primer boom sin los embalses de Gorg Blau y Cúber, y sin la central térmica de Es Murterar, así como tampoco hubiera podido superar el segundo, el de la «democracia», sin la desaladora de Son Tugores y la incineradora de Son Reus, asimismo productora de energía. La conexión con la red eléctrica peninsular garantiza el suministro que necesitará una expansión posterior, por más

que haga Mallorca aún más dependiente del exterior. Queda aún por resolver el problema del agua, con unos acuíferos sobrexplotados. Considerada como mercancía, la energía es un poderoso factor de concentración de poder; los cables, el oleoducto y el gasoducto submarinos son las cadenas con que el poder de las multinacionales energéticas aprisiona a la sociedad mallorquina. Sin embargo, la producción autóctona sigue siendo necesaria para evitar los desastres de una dependencia absoluta en caso de avería o sabotaje. La llegada del gas a espuertas ha impulsado la construcción de centrales térmicas de ciclo combinado, la verdadera apuesta energética, junto con la incineración, del Govern balear, que a pesar de todo aún no ha desbancado al carbón, todavía la fuente mayoritaria. Las líneas de alta tensión son los tentáculos de la urbanización, que evidentemente sigue impulsándose, no encontrando una oposición que vaya más allá de reivindicar un trazado distinto. Las plantas de producción de energía renovable existen solamente como refugio del capital inmobiliario, ya que los precios de la luz y del gas siguen subiendo y la inversión parece recuperable en cinco o seis años. Realmente, los proyectos de producción energética de fuentes renovables, principalmente solares, no significan una transformación del capitalismo en Mallorca, al fin preocupado por la diversidad y la integración de la vida con la naturaleza, ni mucho menos el inicio de

una «transición energética»; se trata solo de un tanteo del negocio, hecho por grupos empresariales de ocasión apoyados por la banca. No cuestionan en lo más mínimo el turismo de masas, ya que obedecen a intereses privados, no sociales, y siguen los parámetros centralizadores típicos de las térmicas y nucleares: fuerte inversión, gran tamaño, un mayor consumo de suelo y conexión con la red convencional que permite llevar la energía a lugares alejados. Por otra parte, la electricidad no es la forma de energía hegemónica en una isla que cuenta con un millón de vehículos a motor. Actualmente, la dependencia del combustible fósil es total y el modelo energético es el de siempre, puesto que va ligado estrechamente al modelo turístico de masas, pero las disposiciones mundiales contra el cambio climático aseguran a los inversores que se aventuren en las renovables industriales un pedazo apreciable de la tarta energética.

La peculiaridad industrial de las centrales solares fotovoltaicas hace que el carácter renovable de la energía producida sea cuestionable. Se necesitan grandes extensiones de terreno (casi siempre agrícola), material de construcción, carreteras de acceso, transformadores, estructuras de soporte, cables y acumuladores, todo ello con un coste energético determinado. El impacto visual sigue siendo negativo. La construcción de paneles solares implica consumo de aluminio, acero y vidrio, pero es la fabricación de

obleas de silicio cristalino o amorfo la que presenta la factura energética más alta y la que genera residuos más contaminantes (gases, polvo, restos de obleas). El silicio, a pesar de ser muy abundante en el globo, es bastante caro en la forma requerida, y además, su producción está concentrada en cuatro Estados que monopolizan el mercado. Son más eficaces o más baratos el arseniuro de galio, el teluro de cadmio o los sulfuros y seleniuros de indio y germanio, pero todos estos elementos son escasísimos y por consiguiente nada renovables. Su obtención requiere procesamientos muy violentos con el territorio y altamente consumidores de energía. Por otro lado, la eficiencia de los paneles no es total; depende de la insolación, la inclinación y la orientación. Finalmente, el parque ha de ir asociado a una fuente de energía fósil, puesto que no funciona cuando no hace sol. Los expertos minimizan interesadamente la tasa de retorno energético del panel en cuatro años, mientras que su vida útil es de veinte a treinta, pero con toda probabilidad los paneles habrán de trabajar muchísimo más tiempo para compensar la energía no renovable empleada en la construcción de toda la central. La producción industrial de electricidad a partir de la luz solar es dudosamente limpia, pero tiene la ventaja de estar en sintonía con el giro verde de la economía capitalista, y por lo tanto, de ser perfectamente compatible con el turismo industrial.

En conclusión: no se puede plantear rigurosamente un modelo energético renovable desconectado

de un modelo social no desarrollista, y, lo que es peor, alejado de una lucha coherente contra el capitalismo, que en la isla es una lucha contra toda forma de turismo industrial y toda infraestructura, especialmente el aeropuerto. Es el eslabón débil de la cadena turística: sin aeropuerto no habría turismo. El combate por una sociedad estable, descentralizada, cooperativa y ecológica es fundamentalmente un combate contra los intereses creados en la explotación del territorio, y por consiguiente, una confrontación con la oligarquía política, empresarial y financiera que dirige los destinos del archipiélago. Es ecológico, cultural, social y antiparlamentario, en oposición radical con el crecimiento de la economía. El más elemental de los realismos nos dice que no hay que confiar en propuestas que prometan un capitalismo menos dañino, una motorización más eléctrica, un retorno a la tierra subvencionado, o incluso un turismo sustentable, controlado todo desde las instituciones autonómicas, donde se supone que reside el poder de la «ciudadanía». Este parece ser el caso de partidos que prestan apoyo a la actual coalición gobernante, pero tampoco son de fiar las alternativas semejantes desde la sociedad civil tal como está, desmovilizada y consumista, en las que creen ciertos autodenominados movimientos «sociales». El régimen económico y social que domina Mallorca es irreformable, no hay más remedio que desmantelarlo. Es tanta la destrucción que el menor

cambio real exigirá medidas drásticas, imposibles de adoptar en el marco de un régimen económico, social y político como el presente. La crítica social ha de atacar la raíz de todos los problemas. Las contrainstituciones que surjan de las movilizaciones y los debates asamblearios han de ser su instrumento.

Charla en el Ateneu Lo Tort, Manacor (Mallorca), 27 de octubre de 2016

Neometrópolis, ciudad y derecho al territorio

Ordenación y defensa del territorio

El capital, apoyado en las innovaciones tecnológicas, imprimió a la ciudad un ritmo de crecimiento que desbordó los límites impuestos por la disponibilidad de agua, energía y alimentos, obligando al desarrollo de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de transporte y de evacuación. La moderna clase dominante no se origina únicamente en la industria y el comercio; en gran parte lo fue en torno a la actividad inmobiliaria, a la construcción y a la explotación de equipamientos básicos. La ciudad industrial no fue un asentamiento cerrado ya que nada podía enclaustrarla; gracias al empleo de maquinaria, al consumo intenso de energía, a un imponente aparato burocrático y a los nuevos medios de transporte, no pararía de crecer y desparramarse por los alrededores, configurando una geografía radicalmente distinta, articulada por grandes redes de comunicación y abastecimiento. La sociedad de clases es una

sociedad urbana, no una sociedad ciudadana. En el umbral del siglo XX, la lógica concentracionaria capitalista ha producido una civilización urbana sin verdaderas ciudades: en las aglomeraciones, un centro casi deshabitado concentra todo el poder en manos de una élite industrial, financiera y constructora, envuelto por áreas suburbanas cada vez más extensas donde habitan las masas asalariadas. Algunos sociólogos hablan de «ciudad difusa», «metaciudad» o «posciudad», pero para Lewis Mumford se trataba de una verdadera «anticiudad»: *ciudad diseminada, ciudad aniquilada*. Es un producto de la descomposición ciudadana, ya iniciada con la aparición del Estado moderno; es un conjunto de fragmentos desnaturalizados dispersos por el entorno, sin vida pública ni conexión directa; un espacio quebrado rodeado de escorias donde se instala azarosamente la población masificada y uniformizada. Patrick Geddes, que observó el nacimiento del fenómeno en las cuencas mineras británicas, asignó el nombre de «conurbaciones» a ese tipo de aglomeraciones aptas solo para una vida reducida al mínimo, motorizada y confinada la mayor parte del tiempo en espacios cerrados.

La relación entre urbe y territorio degeneró hasta lo inconcebible a medida que las invenciones tecnológicas se difundían; lo urbano invadió y deshumanizó todo el espacio geográfico, amontonando a una población sin autonomía en bloques patógenos,

destruyendo tierras de cultivo y trivializando el paisaje: el territorio no era más que el espacio suburbano resultante del nuevo modelo bárbaro de ocupación. El caos urbano llegó a tales extremos que forzó a los dirigentes de la ciudad industrial a prever una cierta organización de su trama edificada, dando lugar a la ciencia que trata de la ordenación del espacio para la economía, el urbanismo. La desfiguración y degradación del territorio que se derivaban del proceso de expansión urbana y la subsiguiente acumulación de residuos originaron las propuestas de «planificación regional» sistemática de Geddes, recogidas por la Asociación para la Planificación Regional de América, fundada en 1923 por Mumford. Los reformistas de la Asociación querían estimular un modo de vida intenso, alegre y creativo basado en el equilibrio territorial, para lo que proponían una agricultura de proximidad, una descentralización de la producción de energía, una descongestión de la metrópolis y un reparto equilibrado de la población en unidades convivenciales bien equipadas y conectadas. La planificación regional estaba pensada para eliminar los excesos de población y el despilfarro general de energía, alimentos y bienes de consumo, para reducir y aislar el transporte a larga distancia y para reinstalar industrias cerca de las fuentes de materia prima. La unidad de partida no era ya la ciudad mastodóntica sino la región, definida del siguiente modo:

Una región es un área geográfica que posee una cierta unidad de clima, vegetación, industria y cultura. El regionalista tratará de planificar este espacio de modo que todos los lugares y fuentes de riqueza, desde el bosque a la ciudad, desde las montañas al mar, puedan desarrollarse equilibradamente, y que la población esté distribuida de modo que utilice sus ventajas naturales en lugar de anularlas y destrozarlas.[1]

Salta a la vista el idealismo de los intelectuales comprometidos en poner «diques al diluvio metropolitano», destinado a naufragar en la marea de intereses económicos y en los laberintos burocráticos de la Administración, más preocupada en servirlos. El tema de la planificación regional fue retomado por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pero enfocado de forma opuesta, es decir, intentando conciliar las reformas con los grandes intereses que gobernaban el mundo. En su Carta de Atenas (1933),[2] la definía como totalidad que englobaba «el plan de la ciudad». Insistía en criticar esos

1. Lewis Mumford citado en Peter Hall: *Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996, p. 494.

2. Puede consultarse una traducción de la Carta en bit.ly/3peHKG9. *(N. de la E.)*

«descendientes degenerados de los arrabales» llamados suburbios, «una especie de espuma» que batía los muros de la ciudad y que en el transcurso de las últimas décadas se había «convertido en marea y después en inundación», por lo cual, a fin de asegurar un nuevo equilibrio, o mejor, para consolidar el desequilibrio, no podía separarse en el plano la «ciudad» de la «región», es decir, del territorio. Los arquitectos funcionalistas hablaban en nombre de los intereses generales del capitalismo: aceptaban que el acondicionamiento o la domesticación del territorio eran pues una consecuencia económica de los planes de expansión urbana; sencillamente apostaban por una verticalización, es decir, por una ocupación intensiva del territorio, inaugurando la arquitectura para pobres de bloques, típica de la posguerra. Sin embargo, estos planes no podían contradecir las permisivas leyes del suelo, las cuales favorecían descaradamente los intereses muy concretos de los propietarios de tierras y los especuladores. El beneficio privado inmobiliario se superponía a cualquier racionalización del crecimiento urbano y los planes de «ordenación» no llegarían a confeccionarse hasta pasados los años cincuenta del siglo pasado, cuando el automóvil y el hormigón habían dado una importante vuelta de tuerca a la suburbialización del territorio y el desarrollismo se adueñaba de la política. La conurbación exigía cada vez mayores volúmenes de desplazamientos y una mayor cota

de motorización. La zonificación higiénica tan recomendada por los arquitectos del CIAM, es decir, la separación cada vez más distante entre los lugares de ocio, consumo, residencia, trabajo y desecho con alguna que otra «zona verde» de por medio —nada que ver con el cinturón agrícola recomendado por la Asociación para la Planificación Regional—, aliada con un transporte público deficiente, unas condiciones de vida cada vez más sórdidas y un crédito asequible, precipitó a las masas al vehículo privado, multiplicándose las vías de circulación, y por consiguiente, incrementándose exponencialmente la movilidad, la demanda de energía y el desorden. El proceso desencadenado no era de simple dispersión edificatoria —de ocupación extensiva—, sino de urbanización generalizada, o sea, era una lisa y llana fagocitación del territorio, que al final resultaba cubierto por un tejido urbano indiferenciado. El hábitat, definido por Le Corbusier como «máquina del vivir», no era viable económicamente de ninguna otra manera.[3] El espacio urbanizado extensivamente

[3] Las relaciones de Le Corbusier con el fascismo y sus figuras señeras están excelentemente expuestas en el libro de Olivier Barancy: *Misère de l'espace moderne. La production de Le Corbusier et ses conséquences*, Agone, 2017. Para una crítica a fondo de la propuesta corbusiana, véase Marc Perelman: *Le Corbusier. Una fría visión del mundo*, Virus, Barcelona, 2018. *(N. de la E.)*

devino en su mayoría espacio de la circulación de vehículos. Las autopistas modelarán el territorio y determinarán su articulación. No obstante la prioridad del beneficio privado, la formación de megalópolis o ciudades-región, agujeros negros que absorbían todo el espacio, el patrimonio común y la vitalidad que podía encontrarse, exigía de alguna forma una regulación de los asentamientos periurbanos, de las instalaciones industriales y de los vertederos que dio en llamarse «ordenación del territorio», tal como corresponde a una prolongación de la ya conocida ordenación urbana. La ordenación del territorio, cuya redacción dependía de ingenieros y arquitectos, pretendía ser una disciplina científica cuya función era la de proporcionar un marco legal de actuación de los «agentes económicos», o sea, de los constructores, industriales y especuladores, o más bien, la de legalizar dicha actuación confirmando su arbitrariedad y sus excesos. En realidad no era más que el disfraz científico de la promoción inmobiliaria. La ordenación perseguía ante todo la accesibilidad del territorio, su fácil «conectividad», y por lo tanto requería una multiplicación de infraestructuras. El territorio se sometía a aquellas en lugar de adaptarse estas al territorio. En efecto, las infraestructuras condicionarían e incluso determinarían todos los usos: paisaje, cultivo, circulación, dormitorio, ocio, basurero, cárcel, producción energética... Y allí donde había autopistas, allí estaban los

promotores. La normativa elaborada para justificar esta «cultura de la carretera» con el pretexto del «desarrollo regional», las «economías de escala», la «creación de puestos de trabajo» y la mayor recaudación impositiva se denominó «ordenamiento territorial». Era una consagración del desorden a un nivel cualitativo superior de deterioro, pues para los dirigentes no se trataba de controlar o proteger nada, sino de «conectar» y «dinamizar», es decir, de crear las condiciones óptimas de un crecimiento especulativo que proporcionase ingentes y rápidas ganancias. El «ordenamiento» era la contribución de los funcionarios, técnicos urbanistas y cargos públicos a la destrucción del territorio, las reglas políticas de su transformación completa en capital.

Cincuenta años después de la Carta de Atenas, con las corporaciones financiero-constructoras mucho más poderosas, la Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio (CEMAT), celebrada el 25 de mayo de 1983 precisamente en Torremolinos, lugar emblemático de la destrucción salvaje de la costa, precisaba objetivos en una Carta Europea de Ordenación del Territorio,[4] definida como «la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad», o resumiendo, la plasmación geográfica del

[4] Puede consultarse en bit.ly/3rwq8qS. *(N. de la E.)*

desarrollismo corporativo de las multinacionales. Era un intento mucho más serio de planificar la explotación sistemática del territorio. En aquel momento se empezaban a notar los resultados de los cambios tecnológicos de la posguerra debidos a la carrera por la productividad. El medio urbano, desenvolviéndose linealmente, absorbiendo materiales y regurgitando desperdicios, chocaba frontalmente con el territorio, bloqueando sus procesos cíclicos donde los residuos se reciclaban armónicamente. Las novedades que afectaron a la agricultura (principalmente el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas) y al transporte (los automóviles de gran cilindrada y la sustitución del ferrocarril por el tráiler), junto con el incremento exponencial de la producción de energía y la expansión exponencial de la industria petroquímica, ocasionaron males inimaginables. La verdadera crisis estaba servida: la despoblación del campo, la acumulación de despojos, la polución, el agotamiento de recursos energéticos, el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio climático, etc., eran sus primeras manifestaciones. Pero el movimiento ecologista había degenerado en partidos «verdes» y se había subido al carro del desarrollismo y de la política. Consecuentemente a la estatización del ecologismo, el Estado se había ecologizado, terminando por admitir que las «profundas modificaciones» ocasionadas por el capitalismo en la sociedad civil demandaban «una revisión de los principios

que rigen la organización del espacio con el fin de evitar que se hallen enteramente determinados en virtud de objetivos económicos a corto plazo»,[5] para plasmarla en una «metódica realización de planes de ocupación de suelo» que sentara las bases de «una utilización racional del territorio».[6] Lo que no alcanzaba a disimular la fraseología del «bienestar», «equilibrio entre regiones», «calidad de vida» e «interacción con el medioambiente» era el paso a una sociedad de masas, donde el territorio no era principalmente fuente de alimentos sino capital-espacio dispuesto para ser consumido. Y el consumo preferente provenía de la industrialización del ocio y de la dispersión de las deyecciones urbanas. Pero el territorio tampoco era simplemente almacén y reserva de suelo urbanizable, pues en la explotación de sus recursos se estaban gestando intereses que se sumaban a los del sector inmobiliario y constructor. Desde entonces se ha producido una cascada de leyes «ordenadoras» y planes territoriales, pero la fuerte demanda de suelo, los condicionantes políticos y las crisis —«la variabilidad de la coyuntura económica», diría un experto— han imposibilitado

5. Antonio Alonso Clemente: «Estándares urbanísticos como límites a la potestad de planeamiento urbanístico», *Práctica urbanística. Revista mensual de urbanismo*, n.º 109, 2011, pp. 40-65.

6. *Ibid.*

su aplicación global. Sin embargo, tras el Informe Brundtland de las Naciones Unidas,[7] los ejecutivos que deciden en la economía, al plantearse el problema de la futura escasez de energía, habían tomado conciencia del momento «verde» del capitalismo: en lo sucesivo, el desarrollismo sería «sostenible» o no sería. Para mejor precisión este fue definido en la Conferencia de Río de 1992 como la unión del medioambiente con la economía globalizada adoptando la forma de «capital territorial». El territorio alcanzaba «una nueva dimensión» en la alta política, situándose en el centro del triángulo sociedad-economía-medioambiente. Adquiría prioridad su «vertebración» en tanto que «periferia» de una serie de núcleos centrales con los que cabía conectarse mediante nuevas vías a proyectar. Con ese tipo de descentralización se «maximizaría» su competitividad —aumentaría al máximo su «valor» como «activo»— y se reforzaría la «cohesión económica y social», corrigiéndose los graves desequilibrios que ocasionaba el desigual potencial económico con respecto a las áreas metropolitanas, esos «laboratorios de la economía mundial» y «motores del progreso». Los dirigentes europeos, que concretaron sus objetivos en un documento de 1999 titulado Estrategia

7. Puede consultarse en bit.ly/3IgHoWT. *(N. de la E.)*

Territorial Europea,[8] querían la integración incluso de las partes más recónditas del territorio en la economía mundial, revalorizándolas gracias a las «redes transeuropeas» de transporte, telecomunicaciones y energía, es decir, a través de la constitución de un mercado europeo integrado de la construcción, de la distribución, del turismo de masas, del gas y de la electricidad. Los fondos para la reestructuración, los planes de desarrollo local, la legislación medioambiental, el productivismo y la informatización total, esos son los componentes del *nuevo modelo de desarrollo policéntrico*. Mediante mecanismos de teleparticipación y concertación público-privada se pondrá en marcha una *nueva cultura del territorio* que disimule en lo posible la contradicción insuperable entre los procesos naturales que verdaderamente lo gradúan y los procesos industriales que estructuran la sociedad globalizada. O dicho de otra manera: se tratará de apagar el incendio con una nueva clase de leña.

En la actual etapa de crecimiento capitalista, la del desarrollismo mundializado, el territorio se ha convertido no solo en el soporte de las infraestructuras y el pilar mayor de la urbanización, sino, de modo general, en la principal fuente explotable de recursos y el impulsor imprescindible de la actividad económica. En una economía terciarizada, sin apenas actividad agrícola, se descubre que el capital-territorio disputa al capital-urbe la preponderancia como forma dominante. La acumulación de capitales se ha deslocalizado y el territorio es ahora el elemento primario de una fábrica total y a la vez el punto final del proceso de industrialización de la vida. Paralelamente, el territorio en tanto que capital ha de ser controlado y securizado en función de su importancia estratégica adquirida. Pero precisamente por culpa de sus nuevos cometidos, el territorio ha pasado a ser para el sistema capitalista la contradicción que contiene todas las demás: por un lado, su destrucción en tanto que recurso finito impedirá una explotación que pretende ser infinita, amenazando así los fundamentos de la economía; y por el otro, su destrucción en tanto que artificialización completa del espacio social donde se acumulan los efectos nocivos de un desarrollismo ponzoñoso, comportará la supervivencia de la especie humana en condiciones tan abominables que difícilmente esta podrá soportar. La crisis energética es un ejemplo de lo primero; las revueltas espontáneas de los suburbios metropolitanos del mundo, un ejemplo de lo segundo. Y además, la destrucción del territorio no es soslayable en el contexto actual: dado que la fuerza productiva preponderante, la tecnología, es eminentemente fuerza destructiva, la catástrofe es el resultado y también el requisito previo del funcionamiento capitalista

8. Puede consultarse en bit.ly/3rwSnWn. *(N. de la E.)*

contemporáneo. A lo que conducen las catástrofes es a un mayor control, solución técnica donde las haya, así que la destrucción del territorio no se detiene ante sus consecuencias, sino que impone una monitorización, eso que los «verdes» llaman «seguimiento», los expertos policiales «contención» y los dirigentes, simplemente «salvaguarda del orden». Los controles persiguen tanto adaptar las poblaciones a la devastación, como encarrilar y disolver la protesta. Para una cosa recurrirán a la legislación medioambiental y a los medios, dando juego a las plataformas ciudadanas, al ecologismo político y al voluntariado. Para la otra, echarán mano directamente de la tecnovigilancia y de las fuerzas del orden. La dialéctica capitalista de la destrucción y reconstrucción se duplica en dialéctica de la represión e integración.

El territorio deviene el lugar donde los antagonismos sociales se despliegan en toda su magnitud, y por lo tanto, la cuestión social puede presentarse como cuestión territorial. En los países donde reinan condiciones turbocapitalistas, la defensa del territorio surge en el campo como protección del medio rural y del modo de vida que este hacía posible contra todo tipo de agresiones, y lo hace en la conurbación como respuesta a la degradación insoportable de la vida urbana. En el campo se prolonga en una resistencia a la privatización de bienes comunes como el agua, los bosques o la costa, a las infraestructuras viarias o energéticas, y por último, a la industrialización

de la actividad agraria, resistencia que pretende restaurar la democracia vecinal; en la aglomeración urbana es una lucha por la descolonización de la vida cotidiana que desemboca bien en un combate por el retorno de la vida pública, bien en la deserción de la urbe. En el primer caso se apela al apoyo de las masas urbanas; en el segundo, se invita desde la plaza pública a la ocupación de tierras y a la creación de huertos colectivos. La defensa del territorio es pues una lucha por la ciudad, y viceversa, la lucha por la ciudad es una defensa del territorio. Hubo un tiempo en que la población urbana tenía un fuerte componente agrario, representado en sus órganos rectores. Ciudad y territorio nunca han sido realidades distintas y enfrentadas, puesto que son interdependientes; ni son concebibles una sin la otra, ni se pueden transformar por separado. Ni la libertad ciudadana existirá en un territorio sojuzgado, ni la soberanía municipal podrá darse alrededor de una megalópolis. Para que se dé una verdadera simbiosis, las dos exigen el desmantelamiento de las conurbaciones y la dispersión del poder, pero no la abolición de la ciudad; la recuperación para el cultivo del espacio urbanizado y el fin de la dependencia unilateral no es el fin del proyecto colectivo de convivencia ciudadana: la desindustrialización sigue los pasos de la ruralización, no los de la barbarie anticivilizadora. Desurbanizar el campo y ruralizar la urbe, volver al campo y retornar a la ciudad, tales son las líneas convergentes de una futura

revolución. El derecho al territorio que ha de deducirse de un uso racional del espacio, es también derecho a la ciudad.

Si proclamamos que la defensa del territorio es la nueva lucha de clases, o que, repitámoslo, la cuestión social es ante todo una cuestión territorial, ello no es debido a que los objetivos de una clase oprimida se hayan desplazado de las fábricas a la agricultura, a la recolección o a la caza. En una sociedad hipertecnificada, los oprimidos no forman una clase, puesto que no son sino prótesis de la máquina, entendida como un todo. No los define la recepción de un salario a cambio de un trabajo, sino el ser piezas de un engranaje que los obliga a consumir y endeudarse en un espacio vital condicionado por la economía de mercado y que, por eso mismo, funciona como una gigantesca fábrica. Dicho espacio es urbano pero sin vida urbana; es el espacio de masas sin voz y sin conciencia, infelices, administradas mecánica y autoritariamente por profesionales del adiestramiento. La degradación de la convivencia y la agresividad que lo caracterizan son ambas producto de los factores mórbidos que provocan el amontonamiento, el ritmo de la máquina, la tensión consumista, la incomunicación y la soledad. Patrick Geddes lo llamó *patópolis*, ciudad de las enfermedades, y efectivamente, la vida urbana está minada por condiciones patológicas crecientes, que no paran de producir neuróticos, vividores, deprimidos y sociópatas. La violencia de las

revueltas urbanas refleja la enorme violencia que soportan cotidianamente los desmoralizados habitantes de las conurbaciones. No es una violencia de clase, es una violencia de desclasados. La insurrección latente de las masas no es más que la expresión violentamente lógica de la patología de la vida privatizada, mediocre, apática y esclava. La miseria de la vida cotidiana, acentuada por las crisis, es el denominador común de todos los disturbios urbanos, desde los de las ciudades americanas durante los años cincuenta hasta los más recientes de Estocolmo, Ankara o São Paulo, y es el sustrato de todas las revueltas. A través de ellas se anuncia el nuevo proletariado. Tampoco busquemos en las cuestiones laborales la base donde recomponer el sujeto de la historia, sino en la protesta contra la expropiación total de la vida. Es una protesta que contiene implícitamente el rechazo de un espacio reificado y masificado donde reinan la desmemoria, la ausencia de vínculos y la sumisión; en resumen, el rechazo del hábitat metropolitano. Por consiguiente, la crítica de la vida cotidiana en actos es portadora de una crítica del espacio: de la crítica del urbanismo concentracional de los dirigentes llegamos a la de la domesticación del territorio, adquiriendo por el camino una conciencia social del espacio o, dicho de otro modo, una conciencia territorial. La defensa del territorio, asamblearia por naturaleza, es la materialización de dicha conciencia. La comunidad se manifiesta como reunión, como

«junta», no como unión, no como entidad susceptible de institucionalizarse. En cierto modo se podría decir que si al penetrar en todos los resquicios de la vida la opresión se había espacializado, la lucha contra ella, también. En el fragor de la batalla, la clase de la conciencia, el nuevo proletariado, se constituye creando y defendiendo su espacio, que es su mundo, su objeto. Habita en la sociedad consumista que ha de desmercantilizar, desindustrializar y desurbanizar para poder gestionarla libremente, y su herramienta orgánica no es otra que el ágora territorial.

Si la ordenación del territorio era la última fase de la ordenación de la vida, o sea, el caos planificado, la primera tarea de su defensa será «desordenarlo», es decir, desmasificarlo y desprivatizarlo. La defensa del territorio ha de bregar con grandes contradicciones. La primera de ellas reside en el hecho de que el sujeto que ha de llevarla a cabo está mayoritariamente concentrado en las conurbaciones, el suelo estéril de la inconsciencia y el olvido, por lo que es más probable que los procesos de despoblamiento y de repoblación sigan ritmos diferentes y vayan descoordinados. El urbanismo y la ordenación territorial, con el fin de volver imposible la apropiación liberadora de los lugares y el abandono de las zonas de apelotonamiento, han levantado grandes obstáculos al reequilibrio poblacional. A este escollo se superpone otro: la lucha desde la conurbación es principalmente

destructiva, pues poco se puede construir de autónomo y verdadero en los espacios yermos de la esclavitud asalariada y consumista, y en cambio, en el campo, el aspecto constructivo goza de más oportunidades, pues la cultura campesina rebrota con facilidad en terrenos segregados del mercado; todo lo cual, con una conciencia social ausente, favorece el desarrollo de ideologías mesiánicas y nihilistas en la parte urbanizada, y el de ideologías ciudadanistas ruralistas en la parte suburbanizada, formas de la falsa conciencia que confunden y vuelven a los individuos extraños a la vida libre. Así, en las áreas metropolitanas, la problemática laboral será ensalzada como «lucha de clases», el enfrentamiento con las fuerzas del orden será elevado a los altares de la radicalidad, y la violencia, convertida en un valor absoluto en tanto que «poesía de la revuelta». Por otro lado, en las zonas posrurales, el proteccionismo legalista, el recurso a los partidos y a la Administración, el compromiso ambiental de los empresarios y la economía seudoaltruista, llámese «social» o «colaborativa», llegarán a considerarse panaceas del decrecimiento y de la ruralidad bien entendida. En todas partes ha de construirse una comunidad de lucha para tirar hacia delante, pero igual que no hay que desdeñar los huertos urbanos, los talleres cooperativos o los métodos asamblearios en nombre de la autodefensa de las movilizaciones,

tampoco hay que dejar de lado la guerra por el agua, la lucha contra las infraestructuras y la oposición al desarrollismo urbano, del que los basureros descontrolados, las talas, la contaminación generalizada, los turistas y los campos de golf no son sino consecuencias. Tanto la segregación como la resistencia no tienen como objetivo la supervivencia aislada, sino la consolidación de la comunidad y la abolición del capitalismo. El restablecimiento de los concejos abiertos y de las juntas, comunas o ejidos, la creación de una moneda «social», los circuitos cortos de producción y consumo, y asimismo la recuperación de los terrenos y bienes comunales, no pueden ser vías «altercapitalistas». Su finalidad en el ámbito del *oikos* es la producción de valores de uso, no de valores de cambio. No son trazos identitarios del gueto rural buenrollista, sino facetas de una misma lucha, la lucha por un territorio emancipado de la mercancía y del Estado, cuya atmósfera hará libres a quienes la respiren. Son elementos de importancia mayor de cuya correcta combinación dependerá una estrategia eficaz que conduzca las fuerzas de la conciencia histórica a la victoria. Su evaluación es tarea de la crítica antidesarrollista, que, a diferencia de otro tipo de críticas, no se pierde en generalizaciones teóricas abstractas ni se instala en la pura negatividad o en la simple positividad, puesto que, de forma muy concreta,

sabe o tiene que saber lo que quiere. Por eso no debe intentar coger la luna en el reflejo del agua.

Adaptación de un fragmento de la charla «Breve exposición de la noción de territorio y sus implicaciones», octubre de 2017

El derecho al territorio

1

La sociedad capitalista tiende a constituirse como red metropolitana. La urbanización general es el proceso de adaptación del territorio a las exigencias de la turboeconomía. La expansión ilimitada de las ciudades conforma la llamada sociedad urbana. La disponibilidad de carburantes baratos que facilitaban tanto el desplazamiento en vehículo privado como la «revolución verde», y la deslocalización de la producción agraria han hecho posible dicha sociedad, o dicho de otra manera, han provocado la desaparición de la agricultura tradicional y su mundo. Las metrópolis se han emancipado de los huertos de la periferia aniquilando la vida y la cultura campesinas. La alimentación antaño tradicional de sus habitantes y el cuidado del campo son ahora asunto de la industria agroalimentaria y del mercado mundial del petróleo. A un enjambre de adosados, campos de

golf y centrales eólicas acompaña una comida industrial uniformizada, excesiva, manipulada, adulterada e insana.

2

A partir de ahora los usos del suelo vienen determinados exclusivamente por las necesidades de las aglomeraciones urbanas. El espacio de las cercanías queda inmediatamente suburbanizado y sometido a contaminaciones diversas. Es fagocitado por la urbe. Así pues, el entorno rural queda visto para sentencia: se ha vuelto capital inmobiliario. Ninguna actividad agraria puede subsistir cerca de las aglomeraciones, ni siquiera como ocio, cuando la tierra se ha transformado plenamente en capital.

3

La misma ciudad, en cuanto que proyecto de convivencia colectivo con relativa autonomía, no puede existir al perder los límites. El tejido social no crece con el entramado urbano, determinado este cada vez más por la circulación de vehículos. La sociabilidad se deshace con la acumulación de bloques de pisos dormitorio y la proliferación de autovías. El aprovisionamiento a través del mercado global impone el modelo de alimentación basura.

La vida, estabulada y motorizada, se privatiza y reduce a consumo. Las instituciones ciudadanas son instrumentalizadas por los especuladores inmobiliarios. La ciudad desbordada y desarticulada cae en manos de dirigentes sin control que la gobiernan como una empresa de su propiedad y «ordenan» el territorio de acuerdo con planes que gustan a las constructoras.

4

Reivindicar un uso racional y sostenible del suelo, ya esté abandonado o no, equivale a proclamar la resistencia a la urbanización y a la industrialización como sustrato de cualquier ocupación que se realice en nombre de la razón y de la sostenibilidad. Al final, el futuro de la sociedad dependerá de la manera como se utilice el territorio; si es trabajado colectivamente en reciprocidad con la naturaleza, las formas de la convivencia en su seno evolucionarán hacia el equilibrio y la libertad. Si se explota, se ensucia y se destruye, el territorio no será más que el reflejo de una sociedad amorfa y esclavizada. Apto para que las masas domesticadas y confinadas en las metrópolis-cárcel consuman los fines de semana en tristes residencias secundarias la imagen de una naturaleza y una jardinería rural cuya realidad no se encuentra en ninguna parte.

5

La función social del territorio es fundamental para los humanos: el territorio ha de educar y formar para la acción comunitaria en simbiosis con la naturaleza. Ha de ser la base de la dignificación de la existencia, tan sometida a toda clase de condicionamientos típicamente urbanos: dinero, soledad, masificación, neurosis, despilfarro, ignorancia, manipulación... Por consiguiente, desde el punto de vista antidesarrollista, el uso del espacio ha de ser redefinido dentro de una nueva carta de libertades que contenga un nuevo derecho: el *derecho al territorio*. Derecho a escoger un modo de vida no urbano si se desea (derecho a instalarse en el campo). Derecho a disfrutar del medio, derecho a cultivar y plantar semillas autóctonas, a producir sus propios alimentos y comerlos, derecho a habitar (habitar en sentido genuino significa participar en la vida social, no solamente ocupar un sitio). Derecho al territorio que comporta el deber de preservarlo, restituirlo y defenderlo; deber pues de oponerse a su degradación. Derecho a echar raíces, o a conservarlas.

6

La defensa del territorio tropieza frontalmente con el derecho a la propiedad, las leyes de infraestructuras y los planes urbanísticos cuando delante tiene a los intereses privados de la construcción, del agronegocio o de la energía. Sin embargo, especialmente en periodos de crisis económica, en el momento de cerrarse el ciclo especulativo, el poder no tiene problemas en emplear un lenguaje verde o incluso ultraverde. Así pues, nos trae a colación no solo la tan manoseada sostenibilidad, sino la biodiversidad y la agroecología. Desde las instituciones autonómicas y municipales, a menudo con la complicidad de las ONG, se organizan mercadillos de alimentos ecológicos y grupos de consumo, a la vez que se ceden huertos urbanos a parados. Hasta se han llegado a crear «bancos de tierras» y a promover arriendos que incluyen el compromiso de preservar el paisaje y reciclar los residuos. Evidentemente, lo que presentan como una experiencia de «economía social» es un engaño que nada tiene que ver con la verdadera agroecología o con la soberanía alimentaria, pues estas luchan abiertamente contra la agricultura industrializada y globalizada y defienden la autogestión en el medio rural; en los experimentos mencionados la autorganización es descartada en pro de la mediación y el control en todo momento de burócratas nombrados al efecto. En realidad es una forma de asistencia pública adaptada a la crisis, con la finalidad de mostrar una cara amable del inmundo comercio agrícola y disimular al mismo tiempo los niveles escandalosos de paro y exclusión. La ideología verde de los dirigentes sigue en paralelo, pero como aliada, el mismo camino que la destrucción.

7

Ya en el mismo terreno de la agroecología y la soberanía alimentaria, aprovechando que el antidesarrollismo y la defensa del territorio son todavía débiles, como demuestra la preponderancia del mecanismo organizativo plataformista sobre el modelo asambleario, que las prácticas neorrurales a menudo están despolitizadas, o que las experiencias agrícolas permanecen separadas de la protesta social, surgen voces pidiendo un pacto social entre el Estado y la «ciudadanía», es decir, entre el Estado y los partidos que se arrogan su representación, para aumentar la fiscalidad medioambiental, subvencionar la creación de cooperativas y establecer una política agraria proteccionista para la producción ecológica. Una especie de ruralización de Estado, asesorada por ecologistas patentados y cooptados, que procurarían cuidadosamente conciliar las necesidades marginales del sector con el brutal desarrollo capitalista. Ruralización con gaseosa en beneficio de una potencial pequeña burguesía agraria que se convertirá en la futura responsable del suministro verde de la facción exquisita y *yuppie* de la clase media urbana. Otros hablan de «economía solidaria» (y de mercado social, banca ética, comercio justo o consumo responsable) como modelo de transición inmerso en el mundo capitalista hacia una producción autogestionada. El reformismo de las propuestas ciudadanistas de

ruralismo institucional o de socialmercantilismo «alternativo» esconde la mayoría de veces la intervención de terceros partidos, sindicatos minoritarios y seudomovimientos sociales que mediante plataformas, candidaturas populistas y redes tratan de recuperar una actividad esencialmente anticapitalista, pugnando por una «democracia participativa» que les ceda espacio. Para desgracia suya la restitución del territorio nunca puede ser parcial, ni realizarse desde la Administración, la política o, en general, desde la zona gris del colaboracionismo. El territorio objeto es territorio muerto, apto solamente para fines comerciales. Para darle vida hay que desmercantilizar el campo, el vivir y, de manera global, la sociedad, no buscar complementos a la política o a la economía de mercado. Eso conlleva una desurbanización, una desindustrialización y una descentralización generalizadas; por consiguiente, la desaparición del capital y del Estado. Así pues, si bien implica un esfuerzo constructivo como el que puedan significar las cooperativas «integrales» o las redes «solidarias», también y por encima de todo implica un enfrentamiento decidido y no un pacto con las fuerzas políticas y económicas que nos gobiernan. No obstante, los enemigos de la libertad continuarán hablando de desarrollo sostenible o de regeneración medioambiental y democrática como si eso fuera posible en un mundo hiperurbanizado e industrializado, hasta que un movimiento masivo, una masa crítica fruto de

movilizaciones defensivas en el territorio y las conurbaciones, acabe con su demagogia contemporizadora y los fuerce a quitarse la careta. Si el objetivo es la reconstrucción de la sociedad civil y de la rica cultura campesina desde el ámbito local mediante la formación de comunidades autónomas, no podemos permitirnos ni una migaja de capitalismo ni un milímetro de Estado.

8

La civilización capitalista solamente marcha bien cuando crece, pero nunca crece uniformemente: los centros urbanos absorben todos los recursos del territorio y lo transforman en periferia. Cuando sus posibilidades ecológicas sean superadas, o sea, a medida que se agote el «capital natural» o, mejor dicho, el «capital territorio», el «capital social» o, mejor, el «capital urbe» irá deshaciéndose. El modo de vida consumista y motorizado de las conurbaciones no podrá asegurarse. En ese instante las bases del sistema temblarán porque el esfuerzo exigido a los dominados será excesivo y la relación entre la obediencia a los dirigentes y la prosperidad prometida se revelará como un fraude que hará tomar a los individuos conciencia de su opresión. Las masas, tratando de sobrevivir, desertarán de los bloques donde estaban recluidas. Entonces vendrán los bárbaros y saquearán los templos del imperio del

dinero; los emperadores huirán desnudos por la ventana y nadie jamás los volverá a ver.

Charla en la masía ocupada Can Piella, en el término de Montcada i Reixac (Barcelona), el 15 de octubre de 2012, en apoyo a la protesta contra su orden de desalojo. Charla en el Ateneo Riojano de Logroño, el 7 de noviembre del mismo año

Anexo

Una nota sobre Patrick Geddes y el concepto de conurbación hoy

Patrick Geddes (1854-1932) fue entre otras cosas un pionero de la planificación urbana y regional, la cual abordó desde todos los ángulos en un enfoque evolucionista y multidisciplinar. En sus proyectos, la interacción sustituía a la competencia, tal como la «neotécnica» trataba de hacer con la «paleotécnica». Conforme a su fe en el progreso social, dio siempre prioridad a las necesidades humanas, a la salud, los intereses y el bienestar de los habitantes, preservando historia, costumbres y usos por encima de imposiciones de mercado, modas e imitaciones. Sin embargo, se le recuerda principalmente por el concepto de «conurbación», lugar masificado a la vez que disperso, donde los lazos de vecindad

se aflojaban y las relaciones directas alcanzaban una intensidad mínima, de forma que la vida social en él desaparecía.

Durante las primeras etapas de la industrialización se produjo una nueva distribución del hábitat humano, hasta entonces disperso, urbanizándose comarcas y provincias enteras hasta constituir tras la Primera Guerra Mundial aglomeraciones pobladas muy diferentes de la ciudad tradicional. En una obra muy conocida, *Ciudades en evolución*, Geddes se planteó el nombrar la nueva realidad urbana:

> *No podemos llamarlas constelaciones. Conglomeraciones sería en la actualidad la palabra más próxima, pero corre el riesgo de no ser bien comprendida. ¿Y conurbaciones? Esta podría ser la palabra esencial para designar una nueva forma de agregarse la población que está desarrollando, digamos que inconscientemente, nuevas formas de agrupación social, y, después, de gobierno y administración determinados.*[1]

[1] Patrick Geddes: *L'évolution des villes,* Temenos, Paris, 1994, p. 41 (traducción propia). (Existe una traducción vigente en castellano: *Ciudades en evolución*, trad. Miguel Moro, KRK, Oviedo, 2009).

Cincuenta años más tarde, Lewis Mumford estudió el proceso que conducía a la generalización del fenómeno:

> *Las fuerzas iniciales que crearon la conurbación se veían forzadas por la red de energía eléctrica, el ferrocarril eléctrico y, más recientemente, por el automóvil y la autopista, de modo que el movimiento que al principio estaba en gran parte limitado a la superficie accesible al ferrocarril, está produciéndose ahora en todas partes. En tanto que la primera extensión del sistema fabril produjo una multitud de ciudades nuevas y aumentó de forma considerable la población de los centros existentes, la actual difusión de la superficie de radicación detuvo en buena medida este crecimiento y aumentó enormemente la producción de tejido urbano más o menos indiferenciado, sin relación alguna con un núcleo coherente por dentro o con un límite exterior de cualquier clase.*
>
> *[...]*
>
> *Algunos han llegado a dar a la conurbación el nombre inapropiado de megalópolis, por más que represente, en realidad, el extremo opuesto de la tendencia que dio origen a la ciudad original de ese nombre. La ciudad histórica hipertrofiada era*

> *todavía, residualmente, una entidad: la conurbación es una nulidad y se vuelve cada vez más nula a medida que se va extendiendo.*[2]

A nosotros solo nos queda por añadir que, gracias a las nuevas tecnologías del transporte, de la construcción y de la información, el proceso urbanizador ha culminado acabando a la vez con los restos de civilidad que subsistían en las grandes urbes, de forma que no solamente ha desaparecido la relativa distinción entre conurbación y metrópolis, sino también la que oponía la vieja ciudad al campo. La conurbación, aglomerado impersonal de fragmentos urbanos mortecinos, es ya el único hábitat posible, tal y como corresponde a un territorio uniformizado y trivializado.

---

2. Lewis Mumford: *La ciudad en la historia*, *op. cit.*, p.

VIRUS

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN

Control urbano
Más allá de *Blade Runner*

Mike Davis

ISBN 978-84-17870-04-1 | 160 pp. | 10 €

La máquina es tu amo y señor

Yang, Jenny Chan, Xu Lizhi, Li Fei y Zhang Xiaoqio

ISBN 978-84-92559-90-9 | 128 pp. | 10 €

El desierto que viene
La ecología de Kropotkin

Mike Davis

ISBN 978-84-92559-81-7 | 64 pp. | 8 €

Impreso en febrero de 2022
en Romanyà Valls
La Torre de Claramunt